

C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LANDELINO LAVILLA ALSINA

Sesión Plenaria núm. 127

celebrada el martes, 11 de noviembre de 1980

ORDEN DEL DIA

- Conmemoración del XXX aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
- Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se amplían las plantillas de los Cuerpos de Profesores de Educación General Básica, Catedráticos Numerarios y Profesores Agregados de Bachillerato y Profesores Numerarios y Maestros de Taller de las Escuelas de Maestría Industrial.

Dictámenes de Comisiones:

- De la Comisión Constitucional, sobre la proposición de Ley Orgánica de Defensor del Pueblo. («Boletín Oficial de las Cortes Generales» serie B, núm. 39-II, de 7 de noviembre de 1980.)
- De la Comisión Constitucional, sobre la proposición de Ley Orgánica de modificación del párrafo 4 del artículo 8.º de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum. («Boletín Oficial de las Cortes Generales» serie B, núm. 108-II, de 7 de noviembre de 1980.)
- De la Comisión Constitucional, sobre la proposición de Ley Orgánica de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica. («Boletín Oficial de las Cortes Generales» serie B, núm. 109-II, de 7 de noviembre de 1980.)

Votación final y de conjunto de las siguientes proposiciones de Leyes Orgánicas:

- Defensor del Pueblo.
- **Modificación del párrafo 4 del artículo 8.º de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum.**
- Sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica.

SUMARIO

*Se abre la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.
Se entra en el orden del día.*

	Página
- Conmemoración del XXX aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos	7932
<i>El señor Presidente resalta la importancia de la firma de este Convenio por España y, en nombre del Congreso de los Diputados, rinde un homenaje al Consejo de Europa, como instancia defensora de la democracia en nuestro continente.</i>	
<i>A continuación intervienen los señores Arredonda Crecente (Grupo Parlamentario Andalucista), Monforte Arregui (Grupo Parlamentario Vasco-PNV), Fraga Iribarne (Grupo Parlamentario de Coalición Democrática), Trias de Bes Serra (Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana), Sagaseta Cabrera y Aizpún Tuero (Grupo Parlamentario Mixto), Guerra Fontana (Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña), Solé Tura (Grupo Parlamentario Comunista), Peces-Barba Martínez (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso) y Herrero Rodríguez de Miñón (Grupo Parlamentario Centrista). A continuación hace uso de la palabra el señor Ministro de Justicia (Fernández Ordóñez).</i>	
- Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se amplían las plantillas de los Cuerpos de Profesores de Educación General Básica, Catedráticos Numerarios y Profesores Agregados de Bachillerato y Profesores Numerarios y Maestros de Taller de las Escuelas de Maestría Industrial	7948

*Enmienda proponiendo la incorporación de una Disposición transitoria. Sometida a votación, fue aprobada.
El señor Presidente declara aprobado definitivamente este proyecto de ley con la incorporación de la enmienda del Senado que acaba de ser aceptada.*

Dictámenes de Comisiones:

	Página
- De la Comisión Constitucional sobre la proposición de Ley Orgánica de Defensor del Pueblo	7948

Artículo 1.º. Sin discusión fue aprobado el texto del dictamen.

	Página
- Artículo 2.º	7949

El señor Aguilar Moreno defiende una enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista. Turno en contra de esta enmienda, del señor Peces-Barba Martínez (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso). Intervienen, para rectificar, estos dos señores Diputados. Fue rechazada la enmienda y aprobado el texto del dictamen.

	Página
- Artículos 3.º al 14	7951

En relación con el número 2 del artículo 5.º, el señor Presidente sugiere la corrección de determinada expresión. El señor Peces-Barba Martínez se muestra conforme, así como los restantes Grupos Parlamentarios. Seguidamente, fueron aprobados estos artículos según el texto del dictamen, con la indicada corrección.

	<u>Página</u>
— Artículo 15	7952

El señor Aguilar Moreno defiende una enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista. Turno en contra del señor Silva Cienfuegos-Jovellanos (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso). Fue rechazada la enmienda y aprobado el texto del dictamen.

	<u>Página</u>
— Artículos 16 y 17	7953

El señor Solé Tura (Grupo Parlamentario Comunista) hace notar una errata en el texto del artículo 16. A petición del señor Peces-Barba Martínez, el señor Presidente repite en qué consiste dicha errata y pregunta a la Cámara si está de acuerdo con la corrección oportuna. La Cámara muestra su asentimiento. Seguidamente fueron aprobados estos artículos según el texto del dictamen, con la corrección antes dicha.

Artículos 18, 19 y 20. Sin discusión fueron aprobados según el texto del dictamen.

	<u>Página</u>
— Artículo 21	7953

El señor Aguilar Moreno defiende una enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista. Turno en contra del señor Silva Cienfuegos-Jovellanos (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso). Para rectificar interviene nuevamente el señor Aguilar Moreno. Fue rechazada la enmienda y aprobado el texto del dictamen.

Artículos 22 al 29. Sin discusión fueron aprobados según el texto del dictamen. Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

El señor Presidente anuncia que la votación de conjunto exigida por el artículo 81 de la Constitución para las tres Leyes Orgánicas que figuran en el orden del día tendrá lugar a las nueve de la noche.

Se continúa con el examen de la proposición de Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.

Artículos 30, 31 y 32. El señor Silva Cienfue-

gos-Jovellanos hace notar un error en el artículo 30, que es rectificado, y seguidamente son aprobados estos artículos según el texto del dictamen.

	<u>Página</u>
— Artículo 33	7955

El señor Aguilar Moreno defiende una enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista. Turno en contra del señor Peces-Barba Martínez (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso). En turno de rectificaciones intervienen de nuevos estos dos señores Diputados. Fue rechazada la enmienda y aprobado el texto del dictamen.

Artículos 34 y 35 y Disposición transitoria. Sin discusión fueron aprobados según el texto del dictamen.

	<u>Página</u>
— Disposición final	7956

El señor Aguilar Moreno defiende una enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista. Turno en contra del señor Meilán Gil (Grupo Parlamentario Centrista). Fue rechazada la enmienda propugnando el mantenimiento de esta Disposición final.

El señor Presidente declara concluido el debate de esta proposición de Ley Orgánica. Intervienen para explicar el voto los señores Peces-Barba Martínez, Solé Tura, Fraga Iribarne, Vizcaya Retana, Alzaga Villaamil y Gómez de las Rocas.

De la Comisión Constitucional, sobre la proposición de Ley Orgánica de modificación del párrafo 4 del artículo 8.º de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum.

	<u>Página</u>
— Artículo único	7963

El señor Clavero Arévalo (Grupo Parlamentario Mixto) renuncia a su enmienda. El señor Gómez de las Rocas defiende su enmienda. Turno en contra del señor Cisneros Laborda (Grupo Parlamentario Centrista). En turno de rectificaciones intervienen nuevamente estos dos señores Diputados. Fue aprobado el texto del dictamen y rechazada la enmienda de adición del señor Gómez de las Rocas.

Disposición final. Sin discusión fue aprobado el texto del dictamen.

Página

- Disposición transitoria (nueva) 7968

El señor Clavero Arévalo (Grupo Parlamentario Mixto) renuncia a la defensa de su enmienda propugnando la incorporación de esta Disposición transitoria y pide que sea sometida a votación. El señor Presidente sugiere una modificación en el texto de la enmienda en congruencia con el título de la Ley Orgánica relativa a la regulación de las distintas modalidades de referéndum. La Cámara muestra su asentimiento. Fue aprobada la enmienda con dicha modificación. Para explicar el voto intervienen el señor Alcaraz Masats (Grupo Parlamentario Comunista), la señora Becerril Bustamante (Grupo Parlamentario Centrista) y los señores Gracia Navarro (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), Arredonda Crecente (Grupo Parlamentario Andalucista) y Clavero Arévalo (Grupo Parlamentario Mixto).

Página

- De la Comisión Constitucional, sobre la proposición de Ley Orgánica de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica 7971

Sin discusión fue aprobado este dictamen.

Votación final y de conjunto de las tres proposiciones de Leyes Orgánicas siguientes:

Página

- Defensor del Pueblo 7972

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 285; abstenciones, una.

Página

- Modificación del párrafo 4 del artículo 8.º de la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum 7972

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 280; abstenciones, cuatro; nulos, uno.

Página

- Sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica 7972

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 281; abstenciones, cinco; nulos, uno.

El señor Presidente declara aprobadas estas tres proposiciones de Leyes Orgánicas, que serán objeto de la subsiguiente tramitación prevista en la Constitución.

Se levanta la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

CONMEMORACION DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

El señor PRESIDENTE: El pasado día 4, hace hoy una semana, se cumplió el trigésimo aniversario de la firma del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

España, al integrarse en el Consejo de Europa y suscribir dicho convenio el 24 de noviembre de 1977, ratificándolo el 4 de octubre de 1979, asumió los ideales políticos del Occidente democrático, ideales que hoy presiden e inspiran nuestro ordenamiento jurídico. Porque, Señorías, cuando hace casi dos años el pueblo español aprobó la Constitución, carta magna de nuestra convivencia, consagró como valores superiores del ordenamiento, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Con esa proclamación axiológica, España, constituida en Estado social y democrático de derecho, afirma a la par su identidad real como nación y su conciencia de compartir con el resto de Europa un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas.

El Congreso de los Diputados, fiel a la esencia de las viejas Cortes de España, tuteladoras de fueros y libertades, hace hoy un alto en sus trabajos parlamentarios ordinarios para rendir homenaje al Consejo de Europa, como instancia defensora de la democracia en nuestro continente, y para conmemorar la firma del Conve-

nio, que es, en sí mismo, una noble apelación a la convivencia; convivencia que sólo se alcanza con estabilidad y armonía, cuando los pueblos y las instituciones políticas y sociales dan testimonio diario de responsabilidad en el ejercicio de los derechos, en el cumplimiento de los deberes y en el respeto a la ley.

Por el Grupo Parlamentario Andalucista, tiene la palabra el señor Arredonda.

El señor ARREDONDA CRECENTE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, queremos comenzar expresando nuestra satisfacción por poder celebrar en este Congreso de los Diputados la conmemoración del trigésimo aniversario del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Conmemoración de un acuerdo internacional en defensa de unos valores que, quizá, no han calado profundamente en la conciencia de los españoles y que, por tanto, no representan unos bienes irrenunciables que hay que defender a toda costa y en cualquier lugar.

Esta realidad tiene sus orígenes en la actitud permanente del franquismo, que, de manera sistemática, impidió el ejercicio de los derechos humanos, y, algo que es más grave, lo manipuló y presentó ante la opinión pública como si fuera accesorio y sin valor intrínseco.

Sin embargo, es necesario reconocer que la forma en que estamos realizando la transición democrática no está generando adhesiones entusiastas de los ciudadanos hacia esos valores esenciales que hoy queremos celebrar; hoy, precisamente hoy, en otro orden de cosas, día en que la intransigencia de dos grandes superpotencias, producto de sus particularísimos intereses, está impidiendo el normal desarrollo de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, uno de cuyos objetivos esenciales es la defensa de los derechos fundamentales de la persona y de los pueblos.

En el tema de los Derechos Humanos hay, incluso desde el punto de vista teórico, una evidente contradicción dialéctica entre derechos humanos considerados individualmente, por un lado, y los derechos humanos considerados como comunidad, es decir, colectivamente, por otro. Según priven unos u otros así se inclinará la balanza ideológica de parte de un individualismo de tipo burgués, egoísta y competitivo —derechos humanos individuales— o hacia el colectivismo social —derechos humanos de los

colectivos por encima de las personas, de los individuos.

Ahora bien, sabiendo precisamente que existe esa contradicción dialéctica, hay que mantenerla viva para que ningún extremo de la misma triunfe absolutamente sobre el otro; ni la actitud egoísta e insolidaria del primero: por encima de todo, los valores del individuo; ni la actitud colectiva del segundo: por encima de todo, los intereses de la colectividad.

Pienso que la contradicción existe y está ahí; y la síntesis, que todavía está por ver, hay que encontrarla, desde nuestra perspectiva, en el campo del socialismo democrático, caminando a la vez por el reconocimiento de los derechos de los pueblos.

Pero en este instante de conmemoraciones es nuestro deseo hacer reflexionar a la Cámara sobre la realidad legal y material, consistente en la existencia en España de pueblos diferentes, algunos de los cuales, como el andaluz, están comenzando a conseguir que sea reconocida su personalidad política, jurídica e histórica; aunque, eso sí, a veces se divisen nubes negras sobre los andaluces que se encuentran fuera de Andalucía, en función de que surgen tentaciones de realizar determinadas acciones, determinados actos, que pretenden privar a ciertos pueblos, a ciertos colectivos, de su propia identidad y de su propia cultura, inscribiéndose tales acciones en lo que actualmente se ha llamado genocidio suave, que, en gran medida, se está aplicando con el pueblo gitano, víctima de discriminaciones continuadas. Esta cuestión del reconocimiento del derecho de los pueblos a la soberanía nacional, para nuestro Grupo, es merecedora de especial atención en este momento y lugar.

La primera formulación teórica del derecho de los pueblos se debe al italiano Mancini, que definió a la nación como sujeto natural y necesario. En el Congreso del Partido Bolchevique de 1913 se afirmó el derecho a la autodeterminación de los pueblos que conforman lo que hoy se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y, en 1918, Wilson, a través de sus famosos catorce puntos, insiste en el reconocimiento del principio de las nacionalidades.

No es éste el lugar ni tenemos tiempo, pero quizá sería oportuno hacer una reflexión sobre cómo el totalitarismo, por un lado, y el imperalismo, por otro, dejan vacías de contenido inclusive formulaciones federalistas.

Tanto la Sociedad de Naciones como la ONU admiten como básico el derecho a la autodeterminación de los pueblos autodiferenciados y autoidentificados, y en este sentido se expresa la Resolución 1514 de la Asamblea General. En la reunión de Argel de 1976 se proclamó la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos.

La lucha, sin embargo, continúa en diversos frentes y organismos: el CIEMEN (Centro Internacional Escarré sobre las Minorías Étnicas y Nacionales), el Bureau de los Pueblos sin Estado, con sede en Bruselas, o la Carta de Brest, de 1974, ratificada en 1976, reafirmando el derecho de los pueblos.

A estas luchas clásicas por la autodeterminación de los pueblos, está hoy en día el resurgimiento de los pueblos subdesarrollados, oprimidos, que, en unión de los movimientos de liberación, ponen en cuestión el actual «statu quo» mundial al pretender algo más que el mero reconocimiento de la soberanía formal, su derecho al control de su riqueza, a su desarrollo económico, social, cultural y político.

Ante esta realidad hemos de tomar conciencia clara de la necesidad de ampliar la perspectiva de la contemplación de los derechos humanos, superando la consideración meramente individualista de las libertades ciudadanas.

Para finalizar, quisiéramos no dejar de recordar la problemática de minorías marginadas que existen en España y que recientemente eran objeto de un informe de Cáritas Española: a esos seis u ocho millones de españoles que viven olvidados, aplastados por la miseria, la soledad, el paro, la enfermedad o la vejez, y para los cuales esta conmemoración de los derechos humanos puede representar un cruel sarcasmo.

Al conmemorar el trigésimo aniversario del Convenio de los Derechos Humanos debemos felicitarlos por poder hacerlo en esta Cámara, pero, sobre todo, debemos comprometernos a luchar denodadamente por hacer efectivos los derechos de los individuos para todos los ciudadanos y los derechos de los pueblos para todas las comunidades.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra el señor Monforte.

El señor MONFORTE ARREGUI: Señor Presidente, Señorías, durante muchos años el

alcanzar como meta política los principios recogidos en la Convención que hoy conmemoramos constituía el anhelo de todas las fuerzas democráticas. Hoy, afortunadamente, está superado y la Constitución, incluso en algunos puntos, la desborda, y confiamos que pronto sea ratificado el artículo 25 que recoge los derechos individuales de petición y de reclamación, tal como manifestó el Ministro de Asuntos Exteriores.

Yo me centraré, fundamentalmente, en el contenido de esta Convención que hace referencia, casi exclusiva, a los derechos individuales, y no haré mención de estos derechos colectivos de los pueblos que aparecen recogidos en la Declaración General de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, y en otros documentos.

Concretamente, esta Convención, en materia de cuestiones de derechos de los pueblos, se centra exclusivamente en el artículo 14, cuando habla de las discriminaciones por razones raciales, de lenguaje o de minorías étnicas. Hoy asistimos preocupados al deterioro de estos principios humanos fundamentales en muchas partes del mundo, con el consiguiente efecto del progresivo embrutecimiento de muchas sociedades, especialmente en Sudamérica y países del Este. Pero lo más grave es que las críticas, en un gran porcentaje, responden a actitudes de moral unilateral, en función de quienes sean las víctimas y los países transgresores.

Se ha producido un debilitamiento de la capacidad de crítica de muchos sectores y grupos; por ejemplo, los que antes desplegaban una gran actividad ante la guerra del Vietnam, y ahora permanecen pasivos ante los problemas que sufren millones de refugiados; sectores que denuncian justamente las graves violaciones de derechos humanos en Sudamérica, silencian las que se producen en los países del Este, la situación de los disidentes, etcétera, o a la inversa. Tristemente, los derechos humanos son muchas veces, quizá en exceso, como instrumentos o armas que se lanzan unos sectores frente a otros, echándose en falta actitudes valientes y objetivas que mantengan y defiendan la inviolabilidad de la vida humana y de la integridad física por el hecho de ser humana y no la de éste sí y la de aquél no.

En esta misma línea, en diversas ocasiones, hemos propugnado públicamente que la Delegación española en la Conferencia de Seguridad defienda la difusión clara y transparente de los

derechos humanos con la misma intensidad y alcance que la mayoría de los países occidentales demandan. Bajar la guardia en este tema, como en diversas ocasiones han manifestado conocidos disidentes, será como tolerar las graves violaciones y dejar abandonados a su propia soledad a miles y miles de hombres en el mundo.

Pero esta conmemoración queda especialmente empañada en Euskadi, donde hay una permanente y continua violación de derechos humanos, especialmente del derecho a la vida y su integridad física, desde la práctica de la peor tortura, como es el asesinato, hasta los malos tratos, pasando por la tortura de los secuestrados y sus familias. Y aquí nosotros observamos un doble peligro: primero, cuando los derechos quedan en formulaciones abstractas, aceptados y promulgados, pero no se desarrollan adecuadamente en su concreción o carecen de las debidas garantías de vigilancia y cumplimiento.

En este sentido, es indudable que la presencia en el poder administrativo de personajes de otras épocas, que siguen apegados a sus puestos y bastantes veces a sus antiguos métodos, constituye una rémora fundamental que tiene que abordarse claramente por todos los que tienen responsabilidades públicas.

En segundo lugar, se produce también una actitud similar a la que acontece en el ámbito internacional, y si allí, en ocasiones, parece haber ciegos del ojo derecho o ciegos del ojo izquierdo, aquí también hay moralistas de moral unilateral. Así, por ambos extremos se distinguen los derechos universales, según de quien se trate. El derecho universal a la vida queda reducido si se trata del enemigo, del adversario político, social, y así, desde posiciones radicales, se condenan unas muertes como asesinatos y se aceptan otros asesinatos como muertes, y lo mismo ocurre con las torturas. Desde el «algo habrá hecho» hasta el «hay que acabar con los terroristas» o «la guerra sucia, si es preciso», se mezclan las insensibilidades, la falta de humanidad, el odio, etcétera.

Pero lo más grave de todo esto es que aquel que no participa de esa moral unilateral es calificado de ambiguo por unos y de colaborador por otros. Pedir garantías jurídicas y procesales o apelar a sentimientos de humanidad provoca en ocasiones gritos de escándalo y remolinos de insultos, llegando uno a pensar que

hay radicales de uno y otro signo, que hasta la Cruz Roja y Amnistía Internacional les parecen un peligro público.

Estos días se oyen medidas desorbitadas que entrañarían, de aplicarse, violaciones graves de derechos humanos, y todo ello puede echar por tierra el esfuerzo que los partidos democráticos estamos haciendo por la sensibilización ciudadana y para lograr una reacción firme que aísle políticamente a quienes practican el terrorismo. Algunos olvidan que puede ocurrir, como en las escuelas, que si ante una fechoría de un alumno el maestro establece una sanción colectiva, la clase entera reaccionará indignada ante dicha injusticia; y la verdad es que en todas partes hay halcones y palomas, pero también hay clases especiales y particulares de aves que siembran o pueden provocar actitudes de histeria general o climas desgarrados, cuando tan necesitados estamos de posiciones serenas, con visiones de largo alcance.

Para terminar, diré que el hombre es dictador por instinto, y demócrata por virtud; el paso del instinto dictatorial a la virtud democrática exige fundamentalmente el rechazo de la fuerza y de la coacción, porque el hombre no es fuerte hasta que no desprecia la fuerza y la coacción y no teme al temor, como lo estamos demostrando últimamente mediante una actitud decidida en la defensa de los derechos humanos. Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, tiene la palabra el señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la gran aportación de la filosofía griega y de la teología cristiana fue, sin duda, la de la concepción del hombre como persona, como ser portador de valores trascendentes, con una dignidad y unos derechos que le son inherentes, que van más allá que su «status» concreto en la sociedad.

Los romanos tenían la teoría de los «status»: «Tria enim sunt quae habemus: libertatem, civitatem, familiam». Es decir, la libertad, que se oponía a la esclavitud del hombre-cosa, sujeto de explotación, como la mujer-objeto, sujeto de apropiación en el matrimonio romano; ciudadanía, que dividía al mundo en amigos y enemigos: «Adversus hostem, aeterna autoritas»; y familia,

es decir, sangre, estirpe en los límites de la biología, que algunos racistas, por cierto, siempre intentan revivir.

A pesar de la influencia cristiana, la Edad Media mantuvo, suavizadas, las ideas de servidumbre, estamento y sangre, más o menos azul, como limitaciones importantes de los derechos humanos.

Fue justamente la gran obra de nuestros teólogos-juristas de Salamanca y Alcalá, Francisco de Vitoria, creador del derecho de gentes, que dijo que los indios eran iguales a los españoles ante el Derecho; Luis de Molina, el primer autor que condena expresamente la esclavitud y la trata de negros; y Francisco Suárez, que defenderá la libertad religiosa, por cierto entre los ingleses de su tiempo, frente a Jacobo I. Se ha subrayado la contribución de estos autores al derecho internacional, se ha insistido menos en que su construcción se basa justamente en los derechos inalienables del hombre.

Nuestro siglo XVIII contempla los grandes reformistas: Jovellanos y Martínez Marina; las Cortes de Cádiz, las Cortes del 69, la Restauración y, en definitiva, nuestra Constitución del 78, la cual, por cierto, en su artículo 10.2 relacionó la vinculación de los derechos constitucionales y su interpretación con los acuerdos internacionales ratificados por España.

Hoy conmemoramos, dentro del espíritu que dio lugar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a diversos convenios de la OIT, sin duda ninguna, con especial y justificada prioridad, al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, así como sus protocolos adicionales de 1963 y 1966, ratificados por España en 1979.

Dentro del nuevo marco, a nivel mundial europeo, que confirma y expande aquella gloriosa tradición, todos coincidimos hoy en la valoración de estos principios de libertad y derechos humanos. Pero algo deberíamos añadir aquí desde nuestra visión del mundo, a la vez conservadora y reformista. Las libertades son menos el resultado de una serie de disposiciones legales y procesales que la realidad vital de un estado social, de una serie de hechos culturales,

de unas actitudes profundas de la opinión, de un juego eficaz de las instituciones. El caso más evidente es el de Inglaterra, que funciona hasta hoy sin una declaración de derechos propiamente dicha, pero donde el respeto efectivo de las libertades reales es indudable, porque son viejas, tradicionales, flexibles, perfectibles, más que abstractas, dogmáticas, esotéricas; porque están arraigadas en la jurisprudencia y en la opinión; porque todos las aceptan como un valor comunitario y también —lo último, pero no lo menos importante— porque nunca han cometido el error de confundir el respeto a la libertad con la debilidad contra los que quieren destruirla. Y el sistema entero (social, jurídico, político) se pone en pie como movido por un resorte contra cualquier amenaza global, terrorista, de huelgas salvajes o de cualquier otra cosa. Entonces, los ingleses, como los romanos, vuelven al «*Salus populi, suprema lex*».

Por eso, como hace unos días, ninguna huelga de funcionarios de prisiones o ninguna amenaza terrorista en el Ulster da lugar a vacilaciones y a debilidades. Cuando, como ocurre en parte de nuestro país, grupos violentos destruyen la libertad de todos, nadie tiene derecho a invocar esta o aquella libertad frente a la defensa del orden y de la ley por todos los medios constitucionales necesarios. Del mismo modo creemos que mientras no arreglemos nuestra casa, y fuera de circunstancias realmente excepcionales y de humanidad, carece de todo sentido y oportunidad el prodigar las lecciones a otros de cómo deben hacerlo.

Concluyo. España ha dado pasos importantes hacia la consolidación de un sistema de libertades. El Título I de su Constitución es un decidido e importante acto de fe en las potencialidades creadoras de la libertad. El sistema de recursos y garantías es completo y convincente; las instituciones diversas, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, defensor del pueblo, bien concebidas e incluso impresionantes, pero no debemos engañarnos, ni menos engañar al pueblo. No hay libertad alguna donde impunemente actúan los terroristas, rugen las metralletas, se cobran impuestos revolucionarios, se secuestra y se amenaza, y se corre un peligro grave simplemente por declararse español. No existe libertad real donde aumenta el paro, donde no hay esperanza de trabajo, donde simplemente comer es un problema, donde no hay esperanza

para los jóvenes. Tampoco hay libertad creadora, sino manipulación de las mentes, cuando los caminos de la información están salteados, cuando los medios más poderosos de comunicación social pueden ser notoriamente parciales; no hay libertad en medio de la confusión, de la debilidad y del incumplimiento de la ley. Sólo hay libertad verdadera en una sociedad basada en la confianza, en el mutuo respeto, en los derechos legítimamente adquiridos, todo ello basado en un orden de derecho eficaz y respetado, en una autoridad eficaz y justa.

Porque creemos en la fuerza creadora de la libertad, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político, porque rechazamos la burocratización de la economía, la falta de estímulos a la acción social, la cultura, la educación, sin pluralismo, o cualquier forma de planteamiento equivocado de la base de las libertades, es por lo que, al conmemorar el evento importante que hoy nos une en esta justificada conmemoración, pedimos entrar en la profundización real de nuestras libertades. «No se vende», decía Cervantes en un famoso texto latino que ponía al principio de la obra inmortal de «El Quijote»; «no se vende por todo el oro la libertad»; pero sería aún peor confundir la verdadera libertad con sus apariencias.

Pudiera parecer, finalmente, un retraso lamentable el que del día 4 hayamos pasado a hoy, día 11 de noviembre, en la puntual conmemoración de este Convenio, pues ello nos permite enlazarlo con el hecho de que hoy en Madrid no sabemos cómo comenzará, o si lo hará, efectivamente, una Conferencia Internacional, en la que justamente lo que en este momento se está discutiendo es si se va o no a entrar en el tema de las libertades.

Pues bien, sirvanos esto de ejemplo, de lo que va de lo firmado a lo hecho, de lo dicho a lo prometido y, en definitiva, de estímulo para seguir adelante en la profundización de un auténtico, profundo, genuino, castizo, sistema de libertades.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Minoría Catalana, tiene la palabra el señor Trias de Bes.

El señor TRIAS DE BES SERRA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, es para mí y para mi Grupo Parlamentario una gran

satisfacción intervenir hoy ante Sus Señorías para conmemorar el trigésimo aniversario de la Convención Europea para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, una de las obras y realizaciones más completas del Consejo de Europa.

Hoy, por primera vez en la historia de nuestro país, ratificada la Convención hace precisamente un año, celebramos este aniversario, viejo para Europa, pero nuevo, muy nuevo, para nosotros.

Como Sus Señorías recordarán, España, después de ser invitada a formar parte del Consejo de Europa durante la Asamblea de esa Organización internacional de 12 de octubre de 1977, depositó el correspondiente instrumento de adhesión el 23 de noviembre, al tiempo que firmaba la Convención Europea de los Derechos del Hombre. Después de la entrada en vigor de la Constitución Española el 29 de diciembre de 1978, esta Cámara y el Senado autorizaron la ratificación de la Convención, que se produjo en Estrasburgo, como ustedes recordarán.

Esta satisfacción mía y de mi Grupo, compartida, creo yo, por todos los miembros de esta Cámara, no es una simple declaración o manifestación para salir al paso en esta sesión parlamentaria; es importante detener unos instantes el trabajo legislativo, precisamente para recordar, para resaltar, lo que tantos sacrificios personales ha costado a nuestro país hasta llegar a la ratificación antes aludida. Sacrificios y sufrimientos que, entre otros muchos, han padecido en su propia carne durante muchos años muchas de las Señorías que hoy ocupan un escaño en esta Cámara. Los que como yo y otras Señorías pertenecemos, además, a una de las llamadas minorías nacionales, a un pueblo que es consciente de que, sin la salvaguardia, protección y mantenimiento de los derechos del hombre, peligra su propia identidad y su razón de ser como comunidad autónoma nos sentimos doblemente satisfechos. Este alto en el camino sirvanos cuando menos para reafirmarnos en la convicción de que estamos —y permítaseme la redundancia— en el buen camino.

Recordemos que hasta épocas muy recientes la Comunidad Internacional no se preocupó de definir los derechos humanos y menos aún de su protección por medio de mecanismos propiamente internacionales. Estos cometidos eran reservados a la exclusiva competencia de los

Estados. La definición de los derechos del hombre se contenía en la parte dogmática de las constituciones de tipo tradicional, y su protección se ejercía a través de los órganos y tribunales internos o estatales.

El fenómeno de las declaraciones de derechos arranca, como saben Sus Señorías, de las declaraciones de los Estados Unidos de América, concomitantes con aquella Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, de la Revolución Francesa. El clima de aquel momento histórico se extiende con la expansión de las ideas de la Revolución y son recogidos los derechos del hombre en constituciones, como la nuestra, de corte liberal. Esta situación se prolonga prácticamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El Derecho Internacional se desentiende prácticamente de la protección de los derechos del hombre, y sólo encontramos precedentes de una corriente contraria en las llamadas intervenciones de humanidad y en la protección de las minorías nacionales, llevada a cabo esta última por la fenecida Sociedad de Naciones. En esta situación acceden al poder regímenes de marcado matiz totalitario. La degradación del ser humano en este tipo de regímenes es de sobra conocida; baste recordar el fenecido régimen.

Frente a ello, los aliados de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente los propiamente occidentales —como muy bien saben Sus Señorías—, transforman la protección internacional de los derechos humanos en factor ideológico de la lucha y en una de las bases de la futura paz. No es de extrañar, por tanto, que en el primer proyecto norteamericano de Carta de las Naciones Unidas se incluyera una declaración internacional de derechos del hombre. No obstante, la presión de la opinión pública, especialmente en Estados Unidos, muy especialmente también en los pueblos hispanoamericanos, manifestada en la Conferencia Interamericana celebrada en Méjico, en 1945, tiene como feliz consecuencia la inclusión en la Carta de las Naciones Unidas del postulado del respeto a los derechos humanos. Es entonces cuando la Asamblea y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas se encargan de promover estudios y hacer recomendaciones para hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Lo conseguido en la Carta de San Francisco

es verdaderamente bien poco, pero la presión de determinados países fue tan fuerte que se planteó la necesidad de elaborar un pacto internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Comienza así la ardua tarea y la obra de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, cuyo primer jalón fue conseguir la redacción del proyecto de Declaración Universal de los Derechos del Hombre y su aprobación por la Asamblea General en diciembre del año 1948.

Por fin, se llega en el ámbito geográfico reducido de los países del Consejo de Europa a una alta realización con la Convención para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de sus Libertades, firmada en Roma, y posterior protocolo adicional, firmado en París, y los protocolos que mi antecesor en el uso de la palabra ha citado, como bien saben Sus Señorías.

En esta Convención que hoy conmemoramos se articularon mecanismos de garantía, y esto es fundamental para lo que hoy estamos manifestando; mecanismos de garantía para la salvaguardia de estos derechos, como son la Comisión y el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre. Los logros, claramente positivos en el ámbito europeo, contrastan, sin embargo, con los precarios resultados obtenidos hasta época bien reciente en el plano mundial.

A pesar de nuestras todavía importantes diferencias con esos países, precisamente la esperanza que queremos mantener viva y transmitir a nuestro pueblo, y especialmente a nuestra juventud, es la de pertenecer a una comunidad de naciones donde el ejercicio, la salvaguardia y la tutela de los derechos humanos aseguren a todos los hombres una vida digna de seres humanos y una protección de los mismos en su proyección económica, social, cultural, civil y política.

Del contenido del Convenio de Roma de 5 de noviembre de 1950, que hoy conmemoramos, merece una mención especial, como he dicho, en lo que a Derecho internacional-regional se refiere, el régimen protector de los derechos humanos. En él se organiza por primera vez a escala internacional, aunque regional, la sanción y ejecución jurisdiccionales de aquellos derechos, adquiriendo el ejercicio y goce de los mismos una eficacia y seguridad hasta entonces desconocidas en el ámbito internacional.

La Comisión y el Tribunal de los Derechos del Hombre de Estrasburgo institucionalizan jurisdiccionalmente la protección internacional de los derechos del hombre, en tanto que en la esfera de las Naciones Unidas se permanece todavía en esa atmósfera un tanto etérea y vaga de declaraciones de principios, carentes de real fuerza vinculante y de eficacia sancionadora.

La Comisión —de ahí su valor, como saben Sus Señorías— tiene como misión tutelar los derechos individuales de las personas, con independencia de que estén reconocidos o no en las leyes internas de los Estados. Trata así de evitar la violación real de los derechos humanos, sea o no consentida por las leyes. Pero la importancia de esta Institución radica en el mero hecho de su existencia, y su conmemoración hoy es precisamente importante por eso, porque estamos conmemorando la existencia de una Institución que salvaguarda lo que nuestra propia Constitución hoy día reconoce.

Por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial se crean unos organismos supranacionales destinados a investigar y juzgar la actuación de los Estados—parte dentro de su propio territorio, con lo que tal hecho representa de renuncia a la soberanía o al principio de soberanía. Esta es la razón, quizá, por la que Estados tan nacionalistas como, por ejemplo, Francia, tardaron tanto tiempo en ratificar esta Convención que hoy conmemoramos; lección que hoy todos debemos tener presente cuando estamos empeñados en la construcción de un Estado de las Autonomías.

La existencia de la misma Comisión sirvió de base, además, para el reconocimiento de otros derechos que también, creemos, deberían ser ratificados por España en ese artículo 25 de la Convención que hoy conmemoramos.

Por último, y para acabar recordando precisamente hoy la existencia de esta Convención y su aplicación, no hacemos sino llamar la atención sobre la necesidad de que esa aplicación sea duradera y su ejemplo extensible a otras regiones internacionales.

La Convención es el primer instrumento de la unión de los europeos, y el mejor elogio de dicho documento no es otro que el que nace espontáneamente de una lectura atenta y meditada de la misma.

En la conservación, protección y salvaguardia de las diferencias lingüísticas, étnicas o confesio-

nales de los distintos pueblos europeos, la Convención intenta definir lo que a todos nos es común, porque, como dijo un viejo luchador italiano, Europa está ya unida en su esencia, en sus elementos espirituales.

Confiemos en que con la Comunidad Económica Europea, con la integración de los Estados que últimamente hemos adoptado un régimen democrático, Europa consiga una unidad en la libertad, junto con el respeto a la identidad de los distintos pueblos que conforman su realidad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el Diputado señor Sagaseta.

El señor SAGASETA CABRERA: Señor Presidente, Señorías, la Unión del Pueblo Canario, en cuyo nombre habla este Diputado, rechaza la concepción abstracta de la libertad. Estamos convencidos de que para esclarecer lo que son los derechos, las libertades políticas y la democracia, hay que partir, ante todo, del contenido social de esas instituciones. Hay que establecer a qué clases benefician esas libertades, qué intereses expresan y cómo se mide la responsabilidad de cada uno ante la colectividad y la de ésta ante cada uno.

En el Estado español actual, derechos —salvo el de la autodeterminación de los pueblos— y libertades aparecen reconocidos en la Constitución: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, etcétera. Al desarrollarse y concretarse en leyes, la Constitución ha quedado como una mera declaración formal, carente de un contenido real, salvo en lo que se refiere a la protección y garantía de la propiedad privada de los medios de producción, cada día más en poder exclusivo de una minoría social internacional y apátrida. En la práctica, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, se les reconoce pero no se les garantiza a millones de trabajadores.

Cuando en nuestra época de arma termonuclear y de exterminio en masa se habla de derechos humanos, tampoco se puede pasar por alto el derecho a la paz internacional. Sin embargo, muchos de los que hoy se llenan la boca de buenas palabras sobre los derechos humanos se ponen a remolque de la política aventurera de rearme y guerra fría de los

círculos belicistas del Pentágono, coadyuvando a la creación de un clima que coloca al mundo en el umbral de una catástrofe universal.

Muchas serían las cosas que esta Cámara tendría que hacer para que, realmente, las gentes de nuestros pueblos se tomen en serio los pronunciamientos a favor de los derechos humanos: adoptar medidas que acaben con los privilegios de esa minoría de grandes capitalistas, que amasan fortunas a costa de los padecimientos de la mayoría del pueblo. Empezar las transformaciones económicas y sociales necesarias para que todo ciudadano pueda ejercer el derecho al trabajo, para que haya una atención médica digna y al alcance de todos, para que no haya un niño sin escuela, para que no haya una persona sin vivienda, para que se frene el alza del coste de la vida y mejoren las condiciones de vida de las capas populares. Poner fuera de la ley a quienes desde dentro y fuera del aparato del Estado apelan al retorno al fascismo. Reconocer el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades que componen el Estado, yendo a la raíz última de lo que ocurre en Euskadi. Frustrar los intentos de incorporar España a la OTAN y a cualquier pacto de tipo militar; que se emprenda activamente una política exterior basada en los principios de no alineamiento y de la coexistencia pacífica, y que se declare el territorio del Estado zona desnuclearizada y la neutralidad del archipiélago canario. Derogar leyes, como la de Seguridad Ciudadana, que han lesionado descaradamente los derechos de los detenidos y facilitan el desenfreno de la arbitrariedad y la tortura. Acabar con la persecución práctica de la libertad de expresión.

Esos principios deben inspirar la labor de esta Cámara, si realmente está por la defensa de los derechos humanos. Nosotros no nos llamamos a engaño. Este Parlamento no podrá afrontar el cumplimiento en toda su extensión de los derechos humanos, en tanto la mayoría de él sea caja de resonancia de los consejos de administración de las grandes empresas capitalistas, como hoy ocurre, y no se transforme en verdadera caja de resonancia de los intereses y anhelos de las grandes masas trabajadoras y populares, y que todos los ciudadanos de este Estado encuentren las condiciones materiales para una vida moral y digna. Nada más.

El señor PRESIDENTE: También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aizpún.

El señor AIZPUN TUERO: Señor Presidente, Señorías, siempre que se habla de derechos humanos se piensa automáticamente en la protección del ciudadano frente al poder del Estado, lo cual es un faceta fundamental de esos derechos humanos, pero nos puede dar una visión parcial, porque se olvida otro aspecto fundamental, que es la función que corresponde al Estado de proteger los derechos del ciudadano frente a las agresiones de que puede ser objeto, aunque sea por parte de otras personas o de otras fuerzas diferentes del Estado.

Es sumamente importante no olvidar la íntima relación que existe entre la protección de los derechos humanos y la vigencia de un Estado de derecho cuya columna vertebral —según se dijo desde esta tribuna— es el imperio de la ley.

Bajo este prisma, es necesario también saber si en España se respetan los derechos humanos.

Ya en aquel artículo 3.º de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 —hoy será el 2.º del Convenio que conmemoramos— se decía que «todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». Y yo me pregunto: ¿Es que gozaban o gozan de este derecho, por ejemplo, el señor Abreu o el señor Garavilla, o los cientos de asesinados civiles, militares, miembros de las Fuerzas de Orden Público, políticos, obreros? ¿O aquel artículo 5.º, hoy 3.º: «Nadie será sometido a torturas, ni a penas a tratos crueles, inhumanos o degradantes»?

Por supuesto que es condenable y condenamos rotundamente la tortura, sea cualquiera la forma en que se ejerza, desde el Poder o desde sus órganos, sobre criminales o presuntos delincuentes. Pero, ¿no constituye tortura un secuestro que priva de libertad al secuestrado, que no sabe si saldrá o no con vida, que angustia a los familiares? ¿No es todo esto un trato cruel, inhumano o degradante? ¿O no son seres humanos los que no delinquen ni presuntamente? También son seres humanos, y no estamos ante un hecho aislado, sino que estas acciones se multiplican cada día más.

Ya es hora de que nos planteemos si en España se violan los derechos humanos. En el

artículo 8.º de aquella Declaración —hoy 13 del Convenio que conmemoramos— se dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los Tribunales nacionales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley. Pero, ¿cuál es ese recurso efectivo? ¿Cuál es ese Tribunal competente que ampara al ciudadano cuya libertad peligra, cuya vida está amenazada, cuyos bienes son objeto de extorsión? ¿Cuál es y dónde está esa protección efectiva? No es una pregunta efectista. Una respuesta efectiva, una respuesta tranquilizadora y una seguridad de que puede desechar temores llevarían hoy la alegría a muchos miles de españoles.

No estoy distorsionando el problema; simplemente contemplo las dos caras de la moneda. No basta con que el Estado no viole los derechos humanos. Es necesario que los haga respetar. Eso es un Estado de derecho y eso es vivir bajo el imperio de la ley. Ya es hora de que aceptemos que también los no delincuentes tienen derechos humanos, que también los que pretenden vivir en paz tienen derecho a la vida, que todos los que aceptan el régimen democrático tienen derecho a ser protegidos, y no basta la formal protección de la ley. La ley no es tal si no es coactiva, si no puede exigirse su cumplimiento. Ese es el imperio de la ley. Si el Estado no garantiza el cumplimiento de la ley, si no puede proteger los derechos humanos de los ciudadanos, ése es el fin de cualquier Estado de derecho y de cualquier democracia. Se empieza por autoprotgerse y se termina por tomar la justicia por su mano. Pero es muy difícil exigir a alguien que renuncie a sus derechos fundamentales, que se resigne a la falta de protección por parte del Estado y que no trate de protegerse a sí mismo. Eso es algo que hay que evitar a toda costa, eso es algo que un gobierno tiene que evitar democráticamente, respetando y haciendo respetar los derechos humanos. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista de Cataluña, tiene la palabra el señor Guerra Fontana.

El señor GUERRA FONTANA: Señor Presidente, Señorías, hoy hemos sentido ya aquí críticas a la situación de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, y son ciertas.

Cierto es que hay déficits en cuanto a la observación y garantía de estos derechos a ambos niveles.

Pero yo creo que hoy no es el día indicado para señalar estos déficits y olvidarnos del sentido progresivo que tiene la historia de los últimos decenios de este siglo, si interpretamos y realizamos el análisis conjunto y total de la historia desde el siglo XVIII en que aparecen las primeras declaraciones de derechos humanos.

Diría más aún, nos ciega posiblemente, o nos impide ver la totalidad del paisaje, el bosque actual que tenemos ante nosotros. Pero hay que comparar nuestra situación, tanto la de España como la de Europa, con la de la Europa de hace cuarenta, cuarenta y cinco o cincuenta años. Es verdad que tenemos problemas, pero tampoco es menos cierto que la historia ha dado un salto cualitativo desde las primeras declaraciones de derechos humanos de tipo racionalista y liberal de los siglos XVIII y XIX, en las que se hablaba de principios generales, pero no se transmitía una preocupación auténtica por la garantía de tales principios. Ante el principio de la propiedad no se hablaba nunca de la defensa del derecho al trabajo; ante el principio del respeto a la vida no se condenaban muchas veces, de forma tajante y rotunda, los defectos y los vicios que impedían su aplicación. Es tan importante el paso que se ha dado en esta materia, no tan sólo por la Convención de Derechos Humanos, trascendental, tal como se ha dicho antes, sino también por el clima internacional que se respira.

Es cierto, se ha dicho antes, que hay déficits, pero tampoco es menos cierto que mientras en los años 30 y 40 en Europa, en muchos países del Este y del Oeste se tenía como blasón el violar los derechos humanos, el atropellarlos, incluso el perseguir y matar libremente a los demócratas, hoy incluso aquellos que los persiguen y violan y continúan en algunos países del mundo matando a los demócratas, manifiestan de forma farisaica hacerlo en nombre de la libertad.

Puede parecer una tontería, pero el salto que se ha dado en favor de la libertad es importante, porque nadie se atreve ya a negarla y todos se ven obligados a defenderla de una forma u otra. Podríamos decir en este terreno que la mentira ha hecho un homenaje a la verdad.

La Convención de los Derechos Humanos que

estamos hoy aquí conmemorando es para nosotros importante, porque es la primera vez que a nivel internacional se crea un Tribunal supranacional tendente a garantizar tales derechos.

Es verdad que nuestro país ha ratificado la Convención, pero tampoco es menos cierto, como se ha dicho aquí anteriormente, que el artículo decisivo, que es el que permite el amparo de esos derechos a través de un recurso especial y de carácter individual al Tribunal correspondiente, España aún no lo ha confirmado. Aún estamos pendientes de la declaración del Estado Español que haga posible la realización de estos derechos, y yo creo que hoy hubiera sido, quizá, la fecha que debía haber previsto nuestro Gobierno para la realización del tal declaración, que hubiera sido el mejor homenaje que la democracia española, los demócratas españoles, podían haber hecho a la fecha actual.

Nosotros, los socialistas, no vamos hoy aquí a quejarnos de los déficits que hay. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ya es conocido que hemos manifestado siempre, y hoy como homenaje lo volvemos a hacer, nuestro deseo y nuestro propósito de, como en el pasado, luchar por la más plena garantía y observancia de dichos derechos. Por eso estamos hoy aquí y participamos plenamente, con todos nuestros esfuerzos y nuestros mejores propósitos, en el homenaje que por la Cámara se ha convenido hacer en este primer punto del orden del día, y únicamente lamentamos, porque creemos que resta fuerza a dicho homenaje, la ausencia de la mayor parte del Gobierno, en especial del Ministro de Asuntos Exteriores, y también la ausencia de muchos Diputados en los bancos de la derecha. Esto no es una crítica, sino simplemente una constatación de nuestro deseo de que así no hubiera sido.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Comunista, tiene la palabra el señor Solé Tura.

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Comunista quiere expresar su satisfacción por la conmemoración del trigésimo aniversario del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de Roma, de 4 de noviembre de 1950.

Consideramos que ésta es una buena iniciativa del Congreso de los Diputados, no sólo por la importancia del aniversario en sí mismo y por el hecho formal de una conmemoración que es testimonio de compromiso en la defensa de los derechos humanos, sino también por otros aspectos que quiero señalar brevemente.

Este acto es, a la vez, el reconocimiento solemne de que España se ha insertado en la ancha corriente del reconocimiento y la protección de los derechos humanos después de cuarenta años de una dictadura que los negó y los ahogó violentamente.

Los comunistas, que estuvimos en primera línea en la lucha por la conquista de los derechos y libertades, lucha que pagamos a un precio muy alto, nos felicitamos por ello de un modo particular y manifestamos nuestra disposición a seguir luchando para que nada ni nadie, desde dentro o desde fuera, nos arrebatase lo que tanto ha costado conquistar.

Este acto parlamentario adquiere también una importancia especial, porque es una afirmación explícita del valor de los derechos y las libertades en unos momentos en que éstos vuelven a estar amenazados por tensiones bélicas, por el rearme, por la amenaza contra la paz y por la tendencia a una nueva bipolarización del mundo.

Las dificultades con que choca la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa son un claro ejemplo de ello. Afirmar y conmemorar estos derechos es apostar por la paz, la distensión, la superación de los bloques y la libertad y la justicia en el mundo.

Por ello, la conmemoración es, o debería ser, algo más que un gesto formal; es, o debería ser, una afirmación de nuestra voluntad, como institución parlamentaria, de hacer frente a la amenaza que se cierne sobre el mundo, luchando por unos derechos y unas libertades que son la antítesis de todas las dictaduras, sean cuales sean sus signos concretos.

El Convenio de 4 de noviembre de 1950 no sólo es una afirmación de derechos, sino, sobre todo, un primer intento de establecer una protección jurisdiccional y política de los mismos a través de unos acuerdos entre Estados, plasmados en instituciones supraestatales. En este sentido, es un paso de considerables proporciones.

Pero sería quedarnos en la superficie del tema

si no pusiéramos de relieve a la vez sus propias limitaciones, y una de ellas es el carácter mismo de las instituciones creadas. La Comisión Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son instituciones que tienen una indudable fuerza moral, pero que todavía tienen un papel muy secundario frente al poder de los protagonistas principales, es decir, de los Estados.

La integración europea es aún más bien un acuerdo entre Estados y grandes empresas multinacionales, que una auténtica unificación política y moral basada en el protagonismo de los pueblos y en el predominio de instituciones comunes que cuenten con el respaldo popular. Esto es algo que ningún gobernante debe perder de vista si no quiere convertir la unidad europea en una simple institución tecnocrática alejada de las aspiraciones de la mayoría de la población. Y si esto es verdad en general, más lo es en el caso de España. Nada sería peor que seguir avanzando hacia la integración europea en el secreto de unas instituciones lejanas, viéndola más como una operación de partido que como una operación de Estado.

Otra limitación a señalar es la de la propia limitación acordada a los derechos y a las libertades. De hecho sólo se contemplan en el Convenio determinados derechos y se excluyen otros, por ejemplo, los derechos económico-sociales, en la línea de una interpretación formal del concepto de derechos humanos que luego sería corroborado por las propias Naciones Unidas, hasta el punto de distinguir en 1966 entre el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto conlleva el peligro de que los derechos protegidos tengan un mero carácter formal. Para poner un ejemplo: ¿qué contenido tiene la afirmación solemne del derecho al trabajo cuando no se cumple ni garantiza?

Una tercera limitación es la que el propio Convenio impone al principio mismo de la protección. Por ejemplo, el artículo 2.º protege el derecho a la vida, pero subordinándolo a la existencia o inexistencia de la pena de muerte. Entiendo que la auténtica protección pasa por la abolición de la pena de muerte, como así lo hemos entendido en el artículo 15 de nuestra Constitución.

Además de todo ello hay que poner de relieve,

y no precisamente para alabarla, la actitud con que el Gobierno español abordó la adhesión del Convenio a finales de 1979. Así, por ejemplo, el Gobierno, contra la opinión de un sector de esta Cámara —y desde luego contra la opinión de nuestro Grupo— estableció una reserva sobre los artículos 5.º y 6.º del Convenio; es decir, sobre las garantías procesales en la privación de libertad en función de las exigencias de la Jurisdicción Militar. Si esto ya era reprochable, más lo es advertir que dicha reserva podría incidir —como de hecho está incidiendo— en la regulación general del proceso penal.

No menos lamentable fue la reserva sobre el artículo 11 que proclama el derecho de sindicación, con el fin de poder restringir la actividad asociativa de los funcionarios públicos. Los efectos interpretativos de esta reserva se están comprobando en relación con los funcionarios del Cuerpo de Policía. Y lamentable es, en fin, la no ratificación del artículo 25 relativo a las competencias de la comisión para conocer demandas individuales.

En general estas reservas —y en menor grado la interpretación de los artículos 3.º, 10.1, 15 y 17— dan la idea de que el Gobierno español acepta el principio de la protección jurisdiccional interna de algunos derechos fundamentales, pero quiere reservarse la libertad de acción para escapar a esa protección en función de las presiones concretas que pueda recibir desde determinados grupos o determinadas instituciones.

Y queda luego el gran tema de la aplicación práctica. El artículo 15 de nuestra Constitución ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico el hermoso principio del artículo 3.º del Convenio de prohibir la práctica de malos tratos y torturas. Pero no hemos conseguido todavía que este principio se aplique plenamente y no tenemos todavía garantías sólidas para hacerlo efectivo. En la reciente discusión de la Ley Orgánica de desarrollo del artículo 55.2 de nuestra Constitución tuvimos oportunidad de dar un gran paso adelante y no lo pudimos dar. Ahora que empiezan a verse factores nuevos en la lucha por aislar políticamente al terrorismo, es preciso ser más audaces, avanzar más en la definición de las garantías contra los malos tratos; dar confianza a la población con una actuación justa y rigurosa de la jurisdicción evitando el escándalo de las discriminaciones en

favor de la extrema derecha; avanzar hacia la institucionalización de la auténtica autonomía y, en general, dar confianza y seguridad a la población. Nosotros mismos deberíamos contribuir a ello revitalizando en este Congreso de los Diputados el funcionamiento de nuestra Comisión de los Derechos Humanos.

Es cierto que estamos ante dos males, y uno de ellos, el del terrorismo, debe ser combatido hasta sus mismas raíces y derrotado, pero no a costa de la reducción de libertades.

Como ya tuve ocasión de decir en esta misma tribuna, la democracia no puede subsistir con el terrorismo, pero tampoco con los malos tratos y las torturas.

Quiero decir con ello que nos queda todavía un largo camino por recorrer. Hemos obtenido victorias y hemos dado ya grandes pasos; nuestra Constitución es, sin duda, el más importante de ellos. Pero ni nuestro sistema político-administrativo ha asumido plenamente la lógica y las consecuencias de estos avances en el terreno jurídico, ni estamos plenamente garantizados contra posibles involuciones. Tenemos que librar todavía una dura batalla para derrotar al terrorismo, para vencer el paro, para asentar nuestro sistema democrático introduciendo el espíritu y la práctica de la democracia en todas las instituciones del Estado, para anular las tentaciones de vuelta atrás y para conseguir que los habitantes de este país sientan de verdad que la práctica de los derechos humanos forma parte de su vida cotidiana.

Nuestro Grupo entiende que ésta es una batalla todavía no ganada plenamente, y que esta conmemoración debe entenderse como la afirmación solemne de nuestro empeño colectivo en seguir avanzando hasta conseguir la plenitud de la victoria. A ello colaboraremos sin desmayo en la medida de nuestras fuerzas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista, que promovió la iniciativa de que este Congreso de los Diputados conmemorase, como ha indicado el señor Presidente al principio, el XXX aniversario

del Convenio Europeo para la Protección o para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, aprobado en Roma el 4 de noviembre de 1950, se siente enormemente satisfecho de que exista en esta Cámara la sensibilidad de haber aceptado, por la Junta de Portavoces, la inclusión en el orden del día de este punto.

Ciertamente, señor Presidente, que esa declaración no se ve muchas veces compensada por el interés o por la sensibilidad de algunos sectores de nuestro país por este tema.

No quisiera que en este momento de nuestra intervención se dejase de recordar, en primer lugar, la lucha y el sufrimiento de tantos y tantos ciudadanos españoles que durante la época de la dictadura combatieron por ver hecha realidad la aceptación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los textos que la han seguido, entre ellos, en el ámbito regional europeo, el Convenio que ahora estamos conmemorando. Y debe quedar constancia en el «Diario de Sesiones» del respeto y la estima del Grupo Parlamentario Socialista por tanto y tanto luchador anónimo por los derechos humanos, por tanto y tanto luchador con nombres y apellidos, que son para todos significativos, en esa lucha. Y debe quedar constancia de aquellas instituciones beneméritas, como el Movimiento Europeo o el Consejo Federal Español, en esa materia, que han luchado, que han soñado en otros tiempos con su sacrificio y con su combate porque esto que hoy estamos haciendo fuera posible.

No es el momento —creo yo— de una utilización coyuntural, de una utilización desviada del sentido de esta conmemoración. Los derechos humanos no es algo que sea grandilocuente o que produzca unos efectos inmediatos; es una pelea día a día, poniendo piedra sobre piedra para combatir contra todos aquellos que renuncian a comprender el mundo y que prefieren manipularlo.

En esa lucha tenemos que reconocer que el Convenio Europeo que ahora estamos conmemorando, con todas sus imperfecciones, con todas las lagunas que tiene, es la culminación de un proceso que se inicia en el mundo moderno; porque, frente a otras opiniones autorizadas que aquí se han expuesto, los derechos humanos, los derechos fundamentales, no son un concepto que se encuentre en todos los momentos de la

Historia, no son un concepto que hunda sus raíces ni en la Edad Antigua ni en la Edad Media, sino que es un concepto histórico del mundo moderno, que se empieza a generar en los albores del tránsito de la modernidad cuando, sobre tres grandes perspectivas: la lucha por la tolerancia, la lucha por los límites del poder y la lucha por la humanización de las condiciones del Derecho Penal en la monarquía absoluta, se va creando este concepto, esta filosofía que se plasma, primero, en los textos nacionales, y que, a partir de la toma de conciencia de la insuficiencia de una protección nacional, se va situando en el ámbito de la protección internacional.

Ciertamente, señor Presidente, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos es enormemente limitado; es enormemente limitado porque se construye sobre el equilibrio y sobre la aceptación de soberanías nacionales y de Estados soberanos, que aún tienen enormes resistencias a entregar parte de las competencias del poder a instituciones de protección y defensa de los derechos humanos. No hay que olvidar, en este sentido, que en el ámbito del Consejo de Europa existe un movimiento de ampliación del ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos a otros derechos —antes se indicaba por el Profesor Solé Tura este tema— que están todavía en el nivel de la Carta Social Europea, y que, por consiguiente, no tienen la eficaz protección que está en este texto y que, a través de ese movimiento, se pretende incorporar al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Me refiero, en concreto, a dos temas que no están aquí, respecto de los cuales somos especialmente sensibles los socialistas: por un lado, al derecho de huelga y, por otro, a la libertad sindical.

En todo caso, con esas imperfecciones, con esas dificultades, con esas lagunas, en esa construcción paso a paso de aquellos que no tienen la visión mesiánica de reformar el mundo en un acto de la noche a la mañana, sino que son conscientes de que la reforma se produce paso a paso, con la lucha constante en defensa de los derechos humanos, se ha dado un paso de gigante, como es el que, por primera vez en la historia de la cultura jurídica, la persona individual sea a su vez sujeto del Derecho Internacional.

Solamente lo eran con anterioridad los Estados soberanos; y ese equilibrio que surge en la

Europa moderna, a partir de principios del siglo XIX, es sustituido por la intervención, todavía enormemente tímida, del individuo como sujeto internacional, como persona que es capaz de abrir las puertas de un mecanismo de protección internacional de los derechos humanos.

Y me gustaría que se valorase suficientemente lo que significa el que, a todos los niveles, e incluso para la propia acción de nuestros jueces, para la propia acción de nuestras instituciones nacionales, exista una organización supranacional, a nivel regional, que puede permitir que cuando, agotados los niveles de los recursos internos, los ciudadanos de un país que no se sientan satisfechos con la solución que se ha dado por esos órganos, puedan abrir un pórtico, tímido todavía, pero esperanzado, de una institución supranacional.

Yo creo que eso supone muchísimo y es, junto con otras, una garantía complementaria que es necesario fortalecer. Por eso no se trata aquí de hacer una intervención puramente académica; es necesario recordar algunos aspectos concretos que están en el Convenio o que están en las garantías y que sería conveniente que nuestro país asumiese plenamente. Me refiero fundamentalmente a que en relación con la declaración para aceptar este recurso individual ante el Consejo de Europa, este Congreso de los Diputados aceptó una promesa que estaba establecida en un proyecto de Carta sobre el artículo 25 que se nos ofreció y que, aunque consideramos insuficiente, por razones de prudencia, aceptamos. Estamos en el 22 de diciembre de 1978.

Ese proyecto de Carta del Ministro de Asuntos Exteriores al Secretario General del Consejo de Europa, decía: «Señor Secretario General, con motivo del depósito en el día de hoy del instrumento de ratificación por España del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, me complace manifestarle que el Gobierno español tiene la intención de formular la declaración prevista en el artículo 25 de dicho Convenio, es decir, aquella que abre la posibilidad de que la persona individual sea sujeto en las garantías que establece el Convenio Europeo para conocer de demandas individuales, tan pronto como lo permita el desarrollo legislativo consiguiente a la promulgación de la Constitución española.»

Cuando se explicó lo que esto significaba, se dijo que no estaba todavía aprobada la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; que dicho Tribunal no funcionaba y, por consiguiente, era necesaria esta cautela.

Pero ya hemos aprobado la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Desde el mes de julio está funcionando el citado Tribunal y ha asumido ya numerosas demandas en utilización del llamado recurso de amparo que establece nuestra Constitución en garantía de las libertades existentes en el Título I de la misma.

Parece procedente que para que este acto no sea puramente académico, como ya se ha indicado por mi compañero Rodolfo Guerra, del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, el Gobierno, que no está ciertamente representado entusiásticamente por la mayoría de sus Ministros en la conmemoración de este acto, pudiera concretar, y sería el mejor homenaje a este trigésimo aniversario, como ya se indicó en contestación, primero, a una pregunta que tuve el honor de hacer en el Consejo de Europa al señor Ministro de Asuntos Exteriores don Marcelino Oreja, y en contestación también a otra pregunta que en sesión posterior tuvo igualmente el honor de hacer el Diputado del Grupo Socialistas de Cataluña, en aquel mismo foro, señor Verde i Aldea, al actual señor Ministro de Asuntos Exteriores, señor Pérez Llorca, que el Gobierno, insisto, pudiera concretar, en un momento que hay que fijar en el tiempo, esa aceptación del recurso individual.

Hay otros muchos temas, señor Presidente, que permitirían sugerencias en este instante, como que el primero de los derechos que en el Convenio Europeo existen es el del derecho a la vida. Y aunque éste no es el momento de hacer catastrofismo, ni en un sentido ni en el otro, sí hay que recordar ese derecho a la vida. Y también tendría que matizar al señor Solé Tura que, aunque ese mismo artículo mantiene la posibilidad de la existencia de la pena de muerte, ha habido una declaración sobre la abolición de la misma aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con la colaboración, no sé si entusiasta, pero con la colaboración, repito, de todos los Grupos Parlamentarios de esta Cámara en aquellas sesiones, que matiza y hace que haya la esperanza de que esa misma afirmación desaparezca del texto, como se pretende en aquella declaración.

Por eso, y para centrar mi intervención, pediría al Gobierno que hiciese real esta conmemoración y que tuviera la bondad, si es posible, de decirnos en qué momento se piensa hacer, y con qué alcance, la declaración del artículo 25, que abriría definitivamente las puertas a esta esperanza que el Convenio Europeo señala y que no convertiría en puramente académica esta conmemoración, que, de todas formas, me parece útil, importante y significativa de la sensibilidad de nuestro Parlamento para los temas de los derechos humanos. Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Centrista, tiene la palabra el señor Herrero.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: Señor Presidente, este acto solemne del aniversario de la Convención Europea de Derechos Humanos es uno de esos actos cuya trascendencia consiste nada más y nada menos que en la afirmación rotunda de unas creencias y de unos sentimientos capaces de vertebrar todo el resto de nuestra actividad política.

Como ocurría en las fiestas de la Ciudad Antigua, nuestra función hoy al hablar aquí es una función que yo no calificaría de académica; la calificaría de catártica y renovadora. Porque consiste en afirmar, una vez más, con todos los grupos parlamentarios que articulan la representación nacional, el postulado inicial de nuestra Constitución, según el cual la libertad es el valor supremo de nuestro orden político, jurídico y social, y que esta libertad la entendemos como lo hace Occidente, como lo afirmaron los padres fundadores de la unidad europea y como la entiende la suprema jurisdicción del propio Consejo de Europa.

Por ello, confesar estos derechos no es precisamente, como no lo fue en los años 30, apaciguar a quienes los violan de manera sistemática. Confesar estos derechos exige defenderse contra tales violaciones. Este es el significado de la Convención Europea de 1950: concretar nuestra fe en la libertad, que, por abstracta, podría resultar estéril en una serie de derechos positivos que encadenan al viejo Leviatán y lo ponen al servicio del espíritu.

Son muchas las cosas que podrían lucubrarse en este momento en torno a la Convención

Europea como instrumento jurídico internacional y constitucional, y mi Grupo también desea la pronta ratificación, por parte de España, de todo el complejo normativo que la Convención supone, especialmente el recurso individual ante la jurisdicción internacional de Estrasburgo y también la del Protocolo adicional primero, en su momento solicitada por el ilustre portavoz del Grupo Socialista del Congreso, en el que se contiene una expresa consagración del derecho a la libertad de enseñanza y del derecho a la propiedad privada.

Me interesa destacar, sobre todo, el sentido del primero de los derechos que se enuncian en la Convención Europea: el derecho a la vida, al que aquí ya se ha hecho referencia, a esa radical realidad a partir de la cual se da todo lo demás, y sin cuya defensa a ultranza todos los otros derechos carecen de sentido. En nombre de mi Grupo (y creo coincidir en esto con las fuerzas democráticas presentes en esta Cámara), quiero afirmar nuestra convicción en la vida como el más sagrado de los valores, porque sin él no se da ese horizonte de posibilidades en que se sitúan la dignidad del hombre, el libre desarrollo de su personalidad, y los derechos fundamentales a través de los cuales este desarrollo es posible.

Pero quiero también señalar que, siendo la vida un valor básico, fundamental a los demás, como lo es el horizonte a la visión y a la perspectiva, carece de sentido si no está ilustrada y ornada por las libertades, sin las cuales, por indigna, la vida no merece la pena de ser vivida. Sin los derechos límites que consagra la autonomía vital del ciudadano, la vida de cada cual no es propia, sino que se encuentra plenamente alienada en el «se» impersonal de la colectividad. Sin los derechos que articulan la situación positiva de la libertad, como los de expresión o de manifestación (la libertad carece de lo que los clásicos llamaron su «status positivus»), la vida queda roma, embotada y, en vez de entenderse como actividad, se reduce a la mera adaptación, rayana en lo vegetativo. Sin la libertad entendida como participación, la vida, en su aspecto político, deja de ser ciudadanía para convertirse en mera sujeción. Y no está de más decir ya que la más alta y general manifestación de libertad ciudadana es el poderse sentir miembros de la comunidad que el Estado

personifica, en nuestro caso la grande y plural nación de naciones que es la Monarquía de España. Sin libertad, en fin, la vida se reduce, simplemente, a ser objeto de la zoología. Por ello, los oradores clásicos supieron propugnar el sacrificio de la vida para conservar los valores de la libertad, que a la vida justifican y daban sentido, condenando a aquéllos tan apegados a su alma como para perderla y capaces de sacrificar al mero mantenimiento de la vida las razones del vivir.

Hoy, en España hay un frente especialmente duro y sangrante en la lucha por estos derechos, porque un talante satánico, en nombre de falsos derechos, atenta todos los días al valor supremo de la libertad y también, a la vez, al derecho fundamental a la vida. Los ciudadanos españoles, en una tierra de España, no pueden expresarse ni manifestarse, ni sentirse miembros de una nación de naciones soberana, sin peligro de ser atrozmente asesinados, y una parte de nuestro pueblo, aquellos ciudadanos especialmente beneméritos de la Patria porque la sirven día y noche con las armas en la mano y a cuyo cargo está mantener esa tranquilidad de ánimo que procede de la conciencia que cada cual tiene de su seguridad, son vilipendiados y ultrajados hasta morir.

En este momento solemne, señor Presidente, en que desde el más alto órgano de la representación nacional conmemoramos la consagración internacional del Derecho a la Libertad y a la Vida quiero dejar claro testimonio de que apreciamos tanto ambas como para estar dispuestos a defenderlas e instar al Gobierno a defenderlas hasta las últimas y más graves consecuencias. Y ante quienes ya cayeron en tan áspera lucha, recitar respetuosamente las frases del más ilustre de los atenienses: «No contendemos por cosa igual que los otros, sino por cosa tan grande que ninguna le es semejante.» Y si por ella, los difuntos cuyas exequias hoy celebramos por el solo hecho de conmemorar la libertad y la vida «son muertos peleando esforzadamente porque les parecía dura cosa verse privados de ellas, por eso mismo debemos trabajar incansablemente los que aquí quedamos con vida».

Gracias, señor Presidente.

(Varios señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Ordóñez): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en nombre del Gobierno, y en respuesta a la pregunta formulada por el Diputado señor Peces-Barba sobre la Declaración acerca del artículo 25 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tengo que decir que, efectivamente, el Gobierno formuló la intención de hacer la Declaración al depositar el instrumento de ratificación el 4 de octubre de 1979. Que el hecho de que se haya retrasado la Declaración obedece fundamentalmente a la necesidad de desarrollar los recursos internos previos a la reclamación ante el Tribunal de Estrasburgo; es decir, el desarrollo de todos los recursos jurisdiccionales que esperamos que se lleve a término en un plazo corto. Y, en segundo lugar, el deseo de desarrollar toda la representación del Estado español en régimen de agencia ante el propio Tribunal y los propios organismos europeos.

Entendemos que un plazo razonable y durante un tiempo también razonable, como lo han hecho otros países, permitirá una entrada en vigor, durante un tiempo prorrogable, de esta Declaración; y en este sentido lo que puedo decir a la Cámara en nombre del Gobierno es que el Gobierno ha acordado reconocer, en virtud del artículo 25 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, por un periodo de dos años a partir del 1 de julio de 1981, la competencia de la Comisión Europea de los Derechos del Hombre para hacerse cargo de las solicitudes dirigidas al Secretario General del Consejo de Europa por cualquier persona física, organismo no gubernamental o grupo individual que declare ser víctima de una violación por una de las altas partes contratantes contra derechos reconocidos en este Convenio. Obviamente, este plazo de dos años, como en otros países, es evidentemente renovable.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

**ENMIENDAS DEL SENADO AL
PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE
AMPLIAN LAS PLANTILLAS DE LOS**

**CUERPOS DE PROFESORES DE
EDUCACION GENERAL BASICA,
CATEDRATICOS NUMERARIOS Y
PROFESORES AGREGADOS DE
BACHILLERATO Y PROFESORES
NUMERARIOS Y MAESTROS DE TALLER
DE LAS ESCUELAS DE MAESTRIA
INDUSTRIAL.**

El señor PRESIDENTE: En el punto segundo del orden del día figura, para ser sometida a la consideración del Congreso, una enmienda propuesta por el Senado al proyecto de ley por el que se amplían las plantillas de los Cuerpos de Profesores de Educación General Básica, Catedráticos Numerarios y Profesores Agregados de Bachillerato y Profesores Numerarios y Maestros de Taller de las Escuelas de Maestría Industrial. La enmienda propuesta por el Senado consiste en la incorporación de una Disposición transitoria. Vamos a proceder a su votación.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 270; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda propuesta por el Senado respecto del proyecto de ley por el que se amplían las plantillas de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza General Básica, Catedráticos Numerarios y Profesores Agregados de Bachillerato y Profesores Numerarios y Maestros de Taller de las Escuelas de Maestría Industrial. Con esto, queda definitivamente aprobado este proyecto de ley.

DICTAMENES DE COMISIONES:

**— DE LA COMISION CONSTITUCIONAL,
SOBRE LA PROPOSICION DE LEY OR-
GANICA DE DEFENSOR DEL PUEBLO.**

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión Constitucional sobre la proposición de Ley Orgánica de Defensor del Pueblo.

No hay enmiendas respecto al artículo 1.º Artículo 1.º
Vamos a someterlo a votación.

Comienza la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 270; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 1.º en los términos en que figura en el dictamen de la Comisión.

Artículo 2.º

El Grupo Andalucista mantiene una enmienda al artículo 2.º Tiene la palabra para su defensa el señor Aguilar.

El señor AGUILAR MORENO: Señor Presidente, Señorías, en realidad esta enmienda la mantenemos únicamente en estos momentos a efectos de poder explicar nuestra posición en relación con este artículo, en el que pretendemos simplemente la eliminación del último número del mismo, del número 6, por los motivos que explicitaré seguidamente, pero retiramos nuestra enmienda en cuanto texto alternativo.

En consecuencia, solicitaré ya, desde este momento, la votación separada de ese número y damos nuestro asentimiento al resto del artículo 2.º, tal como figura en el dictamen de la Comisión.

El mantener nuestra oposición a este número último del artículo 2.º se debe a que pensamos que las figuras de los adjuntos al Defensor del Pueblo no deben contemplarse en esta ley. Es decir, que estamos por la supresión de las figuras de los adjuntos y, por lo tanto, sería innecesario, de prosperar esta tesis, la mención y el párrafo entero, sexto, de este artículo 2.º

Esta enmienda, o esta pretensión, no es una pretensión meramente técnica, sino que entendemos que la existencia de estos adjuntos desfigura un poco la institución del Defensor del Pueblo, que, precisamente, la ley y la Constitución quieren llamar Defensor, inspirada en el modelo más famoso de todas estas instituciones, que es el Ombudsmán, que no es un organismo, que no es un colegio y hacia lo que podría tender la ampliación de estos cargos de adjuntos, aparte de constituir, por supuesto, un encarecimiento de la institución.

Por lo visto, no sabemos qué hacer con el dinero que nos sobra y ampliamos el gasto público. Y no se diga que se trata de un tema de funcionalidad, pues el Defensor del Pueblo, evidentemente, podrá contar con todos los asesores libremente elegidos y con todo el equipo que precise. Pero estas argumentaciones

no hubieran sido suficientes para que hubiéramos mantenido en este momento esta pretensión si no fuera porque entendemos que hay un motivo mucho más grave, de incluirse los adjuntos en la Ley de Defensor del Pueblo. No ya, como digo, la innecesariedad que entendemos de esta figura, sino que lo que consideramos muy grave es la introducción, en definitiva, de la política partidista en una institución que debemos procurar, con la idoneidad de la persona que la encarna en su día, que sea lo más aséptica posible en el sentido partidista. La introducción de los adjuntos es la introducción de los partidos, fatalmente. Y no sólo la introducción del partidismo en los adjuntos, sino en la misma persona del Defensor del Pueblo, dado el mecanismo de proposición.

Nos podemos incluso figurar otro debate equivalente al del Consejo de Administración de Radiotelevisión para designar, por esta Cámara y por el Senado, a esas tres personas. Esta politización partidista en esta institución es, de por sí, un virus que inoculamos en el origen ya del Defensor del Pueblo. Figura del adjunto que, por otra parte, era uno solo en la proposición de ley y que han resultado dos durante su tránsito por Ponencia y por Comisión.

¿Qué quiere decir esto? Que así es más fácil lograr un consenso, porque más grupos tienen más aspiraciones a que algo de influencia puedan conseguir en la institución. Es decir, la introducción partidista que queremos evitar.

Para dejar constancia de estos temores y de nuestra postura hemos defendido en este momento la enmienda y pedimos, simplemente, la votación separada del número 6, solicitando por nuestra parte su supresión. Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en defensa del dictamen? *(Pausa.)* Tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Para un turno en contra de la enmienda del Grupo Andalucista, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Lo que sucede, señor Peces-Barba, es que en realidad ha limitado la enmienda a la impugnación del número 6.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Para

un turno en contra de la limitación de la enmienda, si es posible.

El señor PRESIDENTE: El señor Peces-Barba tiene la palabra.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Para oponernos a la enmienda del Grupo Andalucista, tal como ha quedado tras la intervención del señor Aguilar, por entender que no se ha aportado a la ilustración de esta Cámara ninguna razón seria que nos haga reconsiderar la posición que todos los Grupos Parlamentarios han sostenido, con excepción del Grupo Andalucista, o al menos mayoritariamente, en el trabajo que se realizó. Tengo que aprovechar la ocasión para indicar que fue un trabajo concienzudo, de participación y de integración de todos a través de sus enmiendas en la proposición de ley del Grupo Socialista.

Por parte del Grupo que ha defendido ahora su enmienda no entendemos, señor Presidente, que sea suficiente el argumento de juicio de intenciones que aquí se ha manejado. No entro tampoco en la valoración de las intenciones, que supone una desconfianza hacia los partidos, como la que se ha manifestado por el señor Aguilar; desconfianza que no es propia de un régimen político que tiene en su Constitución el reconocimiento del papel importante de los partidos políticos. Partiendo del rechazo de esa observación general del señor Aguilar, tengo que decir que no aceptamos, me parece que no se puede aceptar, el juicio de intenciones al afirmar que los dos adjuntos suponen un intento de reparto de los partidos políticos.

Si se lee con detenimiento y con ojos constructivos el artículo 2.º —que, por otra parte, me parece que el señor Aguilar, digamos, no ha impugnado el resto del mismo—, tenemos que señalar que el Defensor del Pueblo es elegido por mayoría de tres quintos de los miembros del Congreso, ratificada esa propuesta por la misma mayoría del Senado en el plazo de veinte días; y que es el Defensor del Pueblo, elegido de esa manera, quien propone el nombramiento de los adjuntos a las Comisiones del Congreso y del Senado. Por consiguiente, cualquier parangón con alguna otra elección anterior no se puede realizar, no tiene ninguna justificación.

Por fin, señor Presidente, la afirmación que se

ha hecho del encarecimiento que esto supone tenemos que calificarla simplemente de demagógica, porque el señor Aguilar a continuación, en la frase siguiente, ha dicho que el Defensor del Pueblo, sin adjuntos, podría verse asesorado por todo el personal que considerase oportuno; y no entendemos cómo un personal, que sin duda habrá que pagarlo, encarece cuando se le denomina adjunto y no encarece cuando no se le denomina adjunto. Me parece que es, digamos, un recurso populista que hay que rechazar.

Por consiguiente, entendemos que la enmienda no tiene ninguna justificación y pedimos —por eso hemos intervenido en contra— el voto en contra para la enmienda del Grupo Andalucista.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación, tiene la palabra el señor Aguilar.

El señor AGUILAR MORENO: Gracias, señor Presidente, Señorías, lamento muchísimo que el concepto de la democracia en este momento del señor Peces-Barba no se extienda a la discrepancia sobre lo que nosotros entendemos, desde nuestro punto de vista, todo lo modesto que se quiera, pero tan subjetivo como el contrario, que podría mejorar el texto del dictamen. Y entendemos que una tal postura parece ser, en cuanto se habla de que es malinterpretar las intenciones posibles del futuro, que se hace desde una posición que podríamos calificar de angélica, que, evidentemente, no es el campo de la política. Evitar las intenciones es una cosa distinta de evitar las posibilidades de que existan malas intenciones, que es a lo que tiende nuestra enmienda.

El punto que, por último, se ha mencionado es también insuficiente, en cuanto contra-argumentación, entendemos nosotros, puesto que pensamos que el gasto público que origina el rango de adjunto es distinto del que puedan originar otros funcionarios. Por otra parte, bien claro he expresado que, si hubiera sido sólo por ese motivo, no hubiéramos mantenido nuestra enmienda.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación, tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Para decir que es precisamente por respeto a la democracia por lo que hemos tenido la cortesía

de dar los argumentos en contra a las enmiendas del señor Aguilar, y desde luego no tenemos nada que añadir, porque nada ha añadido el señor Aguilar en apoyo de su tesis.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el texto del artículo 2.º, en sus cinco primeros apartados, conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; favorables, 276; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los cinco primeros apartados del artículo 2.º en los términos en que figuran en el dictamen de la Comisión.

Sometemos a votación seguidamente el apartado sexto de este mismo artículo, acumulando a la votación la enmienda de supresión del Grupo Parlamentario Andalucista. Por consiguiente, se somete a votación el apartado sexto del artículo 2.º

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; favorables, 274; en contra, 3; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado también el apartado sexto del artículo 2.º en los términos en que figura en el dictamen de la Comisión.

Artículos 3.º a 14
Somtemos a votación conjunta, seguidamente, los artículos 3.º a 14, ambos inclusive.

El señor Solé tiene la palabra.

El señor SOLE TURA: Sólo desearíamos votar aparte el artículo 11, que era el antiguo 14.

El señor PRESIDENTE: Somtemos a votación los artículos 3.º a 14, ambos inclusive, exclusión hecha del artículo 11, que será objeto de votación separada.

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, se plantea otro problema, y es que entre el actual artículo 13 y el 14 figura la supresión del que

era el antiguo artículo 17; y nosotros querríamos salvar nuestro voto si es que hay que proceder a la votación de la supresión.

El señor PRESIDENTE: No hay que proceder a la votación de la supresión, puesto que lo que votamos es el dictamen tal como ha sido elevado al Pleno por la Comisión.

Podemos, pues, votar los artículos 3.º a 14, excepto el artículo 11.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; favorables, 275; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos 3.º a 14, salvo el artículo 11, en los términos en que figuran en el dictamen de la Comisión.

En el artículo 5.º, número 2, que ya hemos votado, se dice: «La vacante en el cargo se decretará por el Presidente de las Cámaras en los supuestos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato.» Deberá querer decir, probablemente, «Presidente del Congreso».

El señor Peces-Barba tiene la palabra.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Efectivamente, es una mala redacción, o es una mala formulación de lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir es «por el Presidente del Congreso», que a su vez preside las sesiones conjuntas, puesto que el Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales.

Yo creo que quizá deberíamos dejarlo tal como está en este momento y llevarlo al Senado, o hacer una simple rectificación diciendo «Presidente del Congreso». Pero yo tengo el temor de que esto, puesto que el Defensor del Pueblo es alto comisionado de las Cortes Generales, pudiera producir algún problema. Únicamente lo señalo a esos efectos.

Se puede decir «Presidente del Congreso». Por nuestra parte no hay ningún inconveniente, si los demás Grupos están de acuerdo, siempre que en su momento lo expliquemos en el sentido que acabo de indicar.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay objeción por parte de algún Grupo Parlamentario a que se identifique «Presidente del Congreso», puesto

que se trata de actos reglados, de manera que no hay discrecionalidad ninguna? Cuando, por el contrario, sean vacantes con componente de discriminación, son las dos Cámaras las que se pronuncian, conforme el propio apartado señalado. *(Asentimiento.)*

Queda hecha esa rectificación.

Sometemos a votación, seguidamente, el texto del artículo 11, según figura en el dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; favorables, 252; en contra, cinco; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 11 en los términos en que figura en el dictamen de la Comisión.

Artículo 15 El Grupo Parlamentario Andalucista mantiene una enmienda al artículo 15.

Tiene la palabra el señor Aguilar.

El señor AGUILAR MORENO: Señor Presidente, Señorías, en el texto del dictamen se prohíbe la censura en cartas enviadas desde las cárceles al Defensor del Pueblo y también todo tipo de escucha y de intervención entre el Defensor del Pueblo y sus delegados, colaboradores, etcétera, así como con los presos.

Se nos plantea la duda de que hay casos, que no son los que he mencionado y que son a los que se refiere el dictamen de la Comisión, en los que no sabemos a qué atenernos. Acabamos de aprobar en el Pleno anterior la ley sobre los supuestos excepcionales del artículo 55.2 de la Constitución, que permite ciertas limitaciones en las libertades individuales y, concretamente, escuchas en casos de sospecha, etcétera. ¿Puede ser el Defensor del Pueblo sospechoso, por ejemplo, para la Policía? En otras palabras, esta Cámara, representada por su alto comisionado, ¿puede ser sospechosa para el Ministerio del Interior?

Si no es eso lo que insinúa la redacción del texto, que se diga claramente, para lo que, quitando toda duda, se podría aceptar la enmienda que hemos mantenido a este efecto.

El señor PRESIDENTE: Turno en contra de esta enmienda. *(Pausa.)* Por el Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor Silva.

El señor SILVA CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, creemos que el texto del artículo 15, según la redacción que figura en el dictamen de la Comisión, es suficientemente expresivo, que no cabe ninguna interpretación que conduzca a la hipótesis de que el Defensor del Pueblo sea objeto de escucha, desde el mismo momento en que ni siquiera puede serlo, cuando mantenga una comunicación, telefónica o postal, con cualquier clase de detenido o persona sometida a medidas de seguridad, y que, en todo caso, el hecho de que se le de el tratamiento que figura en el artículo 15, que se refiere a un supuesto extremo de comunicación con personas detenidas o internadas, comprende todos aquellos supuestos interiores, es decir, aquellos supuestos en los que las personas no están sometidas a ninguna de estas medidas.

Por tanto, creemos que implícitamente todos los demás supuestos están comprendidos y que la aclaración solicitada por el enmendante es innecesaria en una justa interpretación del texto del dictamen de la Comisión.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.

Sometemos a votación, en primer lugar, la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista al artículo 15.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; favorables, 19; en contra, 239; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista respecto del artículo 15.

Seguidamente sometemos a votación el texto del artículo 15 conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 268; en contra, dos; abstenciones, cinco.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 15 conforme al dictamen de la Comisión.

Artículos
16 y 17

Pasamos, a continuación, a los artículos 16 y 17. *(Pausa.)* Por el Grupo Comunista, tiene la palabra el señor Solé.

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, simplemente para señalar un levisimo error que hay en la tercera línea del número 2 del artículo 16, que dice: «las que esté pendiente de resolución judicial...» Sobra la preposición «de». Entonces, tendría que ser «las que esté pendiente resolución judicial...»

El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción por algún Grupo Parlamentario? *(Pausa.)* Tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Rogaría al señor Solé que, si pudiera, lo repitiese, porque no hemos entendido exactamente.

El señor PRESIDENTE: El número 2 del artículo 16 dice: «El Defensor del Pueblo no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente de resolución judicial...» Se refiere a la preposición «de». ¿De acuerdo en la supresión de la preposición «de»? *(Asentimiento.)*

Vamos a someter a votación los artículos 16 y 17 conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 270; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos 16 y 17 en los términos en que figuran en el dictamen de la Comisión.

El Grupo Parlamentario Andalucista mantiene una enmienda al artículo 18, que ha sido ya objeto de debate con anterioridad.

Tiene la palabra el señor Aguilar.

El señor AGUILAR MORENO: Señor Presidente, retiramos lógicamente esta enmienda, así como aprovecho el uso de la palabra para decir que retiramos también la enmienda, creo que al artículo 26 del informe de la Ponencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El artículo 26 del informe de la Ponencia es el artículo 23 del dictamen.

Se somete a votación el texto del artículo 18 según figura en el dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 272; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 18 en los términos en que figura en el dictamen de la Comisión.

Se someten a votación, seguidamente, los artículos 19 y 20.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 270; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos 19 y 20 conforme al dictamen de la Comisión.

El Grupo Parlamentario Andalucista mantiene una enmienda al artículo 21. Artículo 21

Tiene la palabra el señor Aguilar.

El señor AGUILAR MORENO: Señor Presidente, Señorías, nuestra enmienda pretende eliminar en el número 1 «salvo en el caso de que éstas, por su naturaleza, fuesen consideradas como de carácter reservado o declaradas secretas».

Si el Defensor del Pueblo no puede, en ciertos casos, informar de su gestión, entendemos que poco prestigio adquirirá entre los ciudadanos. Si una queja es fundada en principio, aunque no sea cierta, que es otro tema, ¿cómo puede ser secreto? ¿Cómo ha podido dar lugar a que se haga una queja sobre algo que es secreto? Nos parece que estaríamos ante un secreto a voces y por eso entendemos que debemos suprimir este párrafo.

El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno en contra de esta enmienda, tiene la palabra el señor Silva.

El señor SILVA CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Señor presidente, señoras y señores Diputados, el Defensor del Pueblo es un alto comisariado de las Cortes Generales. Esto quiere decir que le pueden alcanzar algunas de las prerrogas

Artículos 18,
19 y 20

tivas de que disfrutaran las Cortes Generales, pero que, en ningún caso, puede disfrutar de mayores prerrogativas que las propias Cortes, de las que es alto comisionado.

Pues bien, el artículo 10.2 de la Ley de Secretos Oficiales, número 48/1978, dice que la declaración de materias clasificadas no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información reclamen en la forma que determinen los respectivos reglamentos y, en su caso, en sesiones secretas. Quiere decir que este precepto no autoriza a las Cortes Generales a declarar materia reservada, ni les autoriza tampoco a hacer públicas aquellas materias reservadas, a las que tenga acceso; autoriza únicamente a las Cortes Generales a tener acceso a materias reservadas.

En cambio, la enmienda va más allá de esta prerrogativa de las Cortes Generales. Y va más allá porque atribuye al Defensor del Pueblo la posibilidad de determinar libremente cuándo un documento tiene carácter de reservado o secreto, y eso ni siquiera pueden hacerlo las Cortes Generales. Va más allá también de las atribuciones o prerrogativas de que disfrutaran las Cortes Generales en la medida en que podrían hacer público un documento que estuviese clasificado de secreto, pero que libremente el propio Defensor del Pueblo considerase que no tenía tal naturaleza. Por tanto, creemos que desborda aquel mandato, aquella comisión otorgada por las Cortes Generales, y que va más allá del propio campo de posibilidades de las Cortes.

Lo que pretende el texto de la Ponencia es simplemente atribuir un mandato limitado. Quiere decirse que, de todo ese potencial de que disfrutaran las Cortes Generales en relación con las materias reservadas, se establece un procedimiento para que el Defensor del Pueblo tenga acceso a esa documentación, pero mediante unos trámites sucesivos, que son los que se contienen precisamente en el dictamen de la Comisión.

En definitiva, cuando el Defensor del Pueblo considere una materia que ha sido declarada reservada por el Consejo de Ministros —y así se exige que lo sea en el propio dictamen de la Comisión— y estime no obstante que es imprescindible para agotar su investigación, podrá ponerlo en conocimiento de las Cortes, que podrán, a su vez, hacer uso de aquella preroga-

tiva que establece el artículo 10.2 de la Ley de Secretos Oficiales.

Creemos que la fórmula mantiene un exquisito equilibrio entre los derechos de los ciudadanos vinculados a través del Defensor del Pueblo y, en todo caso, la salvaguardia de los intereses del Estado.

El señor PRESIDENTE: En turno de rectificación, tiene la palabra el señor Aguilar.

El señor AGUILAR MORENO: Señor Presidente, simplemente para hacer ver que, a nuestro entender, el supuesto del artículo 10 de la Ley de Secretos Oficiales contempla una situación totalmente distinta. Aquí no estamos ante los derechos de las Cámaras —tanto del Congreso como del Senado—, sino que nos encontramos con un caso, una denuncia concreta, y el número 1 habla «de sus investigaciones y gestión», en la parte que nosotros respetamos. Es evidente que, al menos en la gestión, deberá dar cuenta, siquiera sea por corrección, a la persona que se ha dirigido a él. Lo que pretendemos eliminar de ese párrafo dice: «salvo en el caso de que éstas...» (es decir, las investigaciones y la gestión). Entendemos que ahí existe un aspecto incorrecto que se soslayaría con nuestra enmienda.

Por otra parte, todo ese planteamiento de vinculación de la Ley de Secretos Oficiales en este tema está fuera de lugar, puesto que en este mismo dictamen que estamos ahora estudiando ya se prevé que el Defensor del Pueblo podrá denegar las peticiones que se le dirijan en resolución motivada; entre ellas, por supuesto, podría estar la de que la materia se hallara incurso en una posible materia reservada o clasificada.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. Se somete a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista al artículo 21.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 22; en contra, 231; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la

enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista al artículo 21.

Sometemos a votación, seguidamente, el texto del artículo 21 conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 259; en contra, seis; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 21 en los términos en que figura en el dictamen de la Comisión.

Retirada la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista al artículo 23, no hay más enmiendas a los artículos 22 a 29, ambos inclusive.

Sometemos a votación conjunta los artículos 22 a 29, ambos inclusive.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 271; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos 22 a 29, ambos inclusive, en los términos en que figuran en el dictamen de la Comisión.

Se suspende la sesión por quince minutos.

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: La votación final de conjunto exigida por el artículo 81 de la Constitución respecto de las tres leyes de carácter orgánico que figuran en el orden del día tendrá lugar sobre las nueve de la noche.

El Grupo Parlamentario Andalucista mantiene una enmienda al artículo 30 de la Ley Orgánica de Defensor del Pueblo. Tiene la palabra, para su defensa, el señor Aguilar.

El señor AGUILAR MORENO: Retiro la enmienda, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Retirada la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista respecto del artículo 30, vamos a proceder a la votación de los artículos 30, 31 y 32, conforme

al texto del dictamen de la Comisión. *(El señor Silva pide la palabra.)*

Tiene la palabra el señor Silva.

El señor SILVA CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Creo que hay un error material, provocado por el cambio de numeración de artículos.

En el artículo 30, donde dice: «apartado 2 del artículo 11» debe referirse al apartado 2 del artículo 9, que es el antiguo artículo 11.

El señor PRESIDENTE: Se rectifica la referencia que en el artículo 30 se hace al apartado 2 del artículo 11, que debe ser al apartado 2 del artículo 9.

Hecha esta corrección, sometemos a votación los artículos 30, 31 y 32. Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 278.

El señor PRESIDENTE: Con todos los votos favorables, quedan aprobados los artículos 30, 31 y 32, conforme al texto del dictamen de la Comisión.

Pasamos al artículo 33. Enmienda número 69 del Grupo Parlamentario Andalucista. Tiene la palabra el señor Aguilar.

El señor AGUILAR MORENO: Señor Presidente, Señorías, al discutir el artículo 2.º ya hemos argumentado nuestra postura en contra de la creación de la figura de los adjuntos del Defensor del Pueblo. Aquella enmienda ha sido derrotada, pero, sin embargo, mantenemos aquí esta enmienda para votación, porque, si este artículo se rechazase, todavía cabría interpretar el artículo 2.º, ya aprobado, y los otros en que, con posterioridad, se hace también referencia a los adjuntos como una facultad discrecional del Defensor del Pueblo.

Sin embargo, en la redacción del dictamen se está imponiendo la figura del adjunto primero y del adjunto segundo, creando las complicaciones prácticas que ya hemos denunciado y la apertura de un proceso que, fatalmente —no voluntariamente, sino fatalmente—, lleva a la politización partidista de la institución.

Nuestra enmienda sirve, pues, para solucionar, en cambio, los problemas técnicos y burocráticos; da agilidad y libertad al Defensor del

Artículos
22 al 29

Artículo 33

Artículos
30, 31 y 32

Pueblo y evita los daños que prevemos en el texto del dictamen.

El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno en contra de la enmienda, tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, fundamentalmente para felicitar al señor Aguilar por la contumacia de su tesón al mantener esta enmienda, puesto que, en realidad, ya se había pronunciado la Cámara por una mayoría abrumadora en la enmienda anterior. Nosotros entendíamos que este tema es causa del otro, por los mismos argumentos que en la otra enmienda dijimos. Así, pues, nosotros nos oponemos a la enmienda que ha defendido el señor Aguilar. Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aguilar.

El señor AGUILAR MORENO: Señor Presidente, Señorías, para lamentar, nuevamente en este caso, que el señor Peces-Barba no haya estado quizá atento a mi intervención, puesto que mis argumentos han sido, en este caso, para propugnar una posible discrecionalidad en la constitución de los adjuntos y no volver a un tema ya debatido.

El señor PRESIDENTE: El señor Peces-Barba tiene la palabra.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Señor Presidente, he oído los argumentos del señor Aguilar, pero también he leído el número 6 del artículo 2.º, que dice: «Designado el Defensor del Pueblo se reunirán de nuevo en sesión conjunta las Comisiones del Congreso y del Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que les sean propuestos por aquél.» Yo creo que este artículo es suficientemente claro para que, a pesar de haber oído y escuchado con el máximo interés y estima, como siempre, las enmiendas que ha defendido el señor Aguilar, realmente tengamos que entender que no son de recibo los argumentos, en cuanto que no existe esa posibilidad desde nuestro punto de vista.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a

la votación. Enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista respecto del artículo 33.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; favorables, 29; negativos, 247; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista respecto del artículo 33.

Se somete a votación seguidamente el texto del artículo 33 conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; favorables, 271; negativos, cinco; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 33 en los términos en que figura en el dictamen de la Comisión.

Sometemos a votación conjunta los artículos 34 y 35, así como la Disposición transitoria. Luego someteremos a debate y votación la introducción de una Disposición final que propugna el Grupo Parlamentario Andalucista.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 277; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos 34 y 35, así como la Disposición transitoria, todo ello de conformidad con el dictamen de la Comisión.

El Grupo Parlamentario Andalucista sostiene la enmienda número 71, por la que propugna el mantenimiento de una Disposición final. Tiene la palabra para su defensa el señor Aguilar.

El señor AGUILAR MORENO: Señor Presidente, Señorías, después del espectáculo dado por esta Cámara para producir el consenso del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, creemos todavía más necesario el emplazamiento legal para la designación del Defensor del Pueblo, si es que, de verdad, se quiere que llegue a existir y funcionar esta institución en alguna fecha que no sea «ad

Artículos
34 y 35 y
Disposición
transitoria

Disposición
final

calendas graecas». Y a ello tiende nuestra enmienda de creación de una Disposición final en que se emplaza por tres meses para que entre en vigor, en primer lugar, la ley y después se designe a esta figura, a esta persona de Defensor del Pueblo.

Con la defensa de esta enmienda que acabo de hacer, terminamos nuestras intervenciones en este dictamen, que han sido las únicas mantenidas en el Pleno en cuanto a enmiendas. Y en esta hora de autofelicitación de esta Cámara, y de todos los Grupos que hemos intervenido en la Ponencia, y en especial a quienes han sido los introductores y realizadores de la institución del Defensor del Pueblo en un momento en la Constitución, y ahora en esta proposición de ley —por otra parte la primera que prospera en esta Cámara de momento—, queremos expresar nuestra felicitación, que hemos entendido más sincera por mantener hasta el final unas enmiendas que, a nuestro modesto entender, podían haber mejorado el texto; nuestra felicitación, como digo, de una sinceridad que entendemos, por nuestra parte, más auténtica que si nos hubiésemos limitado a un asentimiento complaciente.

El señor PRESIDENTE: Turno en contra. *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Meilán.

El señor MEILAN GIL: Señor Presidente, Señorías, brevemente para consumir el turno en contra. Es obvia la buena voluntad de la disposición propuesta por el Grupo Andalucista, pero quizá la introducción jurídica de esta voluntad política no sea del todo eficaz. No hay ninguna seguridad, efectivamente, y no por razones inconfesables, sino por razones espectaculares, para que se cumpla o no ese plazo. Lo que sí es evidente es la voluntad de todos los Grupos aquí representados para que esta ley se lleve a la práctica lo más pronto posible, porque, desde luego, mi Grupo no desearía —creo que la idea es compartida por los demás Grupos— que esta figura importante del Defensor del Pueblo sea un puro lujo normativo y, por tanto, la voluntad política se manifieste; y nos oponemos a la enmienda, porque no parece que produzca en términos jurídicos ese deseo.

El señor PRESIDENTE: Se somete a vota-

ción la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista por la que se propone la incorporación de una disposición final.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 42; en contra, 141; abstenciones, 97.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Andalucista sobre incorporación de una disposición final.

Con esto queda concluido el debate y votación de la proposición de Ley Orgánica de Defensor del Pueblo.

El señor Peces-Barba tiene la palabra.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Hay una disposición transitoria, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La hemos votado con anterioridad.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Entonces, pido la palabra para explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor Peces-Barba.

El señor PECES-BARBA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Simplemente, quisiera, en muy breves instantes, cansar la atención de los señores Diputados para agradecer a todos los Grupos Parlamentarios, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista como proponente, la aceptación de un texto que, inicialmente presentado por nosotros, fue muy sensiblemente mejorado en la Ponencia, lo que permitió que su paso por la Comisión y por el Pleno fuera un paso realmente pacífico y con aceptación general.

Y tengo que decir que entre las contribuciones que se hicieron para completar e integrar el texto están las de todos los Grupos Parlamentarios. El mismo hecho, como ha dicho el señor Aguilar, de que se hayan mantenido muy pocas enmiendas, significa que también las enmiendas de su Grupo Parlamentario, en la muy amplia discusión que hubo en la Ponencia, fueron integradas en la filosofía general y por eso me parecía significativo hacer esta indicación aquí.

Quisiera, muy brevemente, señor Presidente, agradecer, por consiguiente, a todos los Grupos Parlamentarios que han intervenido y que han participado en la redacción en Ponencia y en las mejoras importantes que se hicieron en el trabajo conjunto de todos a la proposición de ley socialista que permite la existencia, al menos a nivel de esta Cámara, si se aprueba la votación de totalidad —como espero y es previsible, dado el tenor general del debate—, de esta proposición de ley.

Porque, señor Presidente, lo que nosotros aquí, con esta aprobación, hemos introducido es un elemento importante para la garantía de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración. Y no debe entenderse, y espero que no se entienda así en el banco azul por los señores Ministros, que son la cabeza de la Administración, que el Defensor del Pueblo es un enemigo del Gobierno, de cualquier gobierno, y que es un enemigo de la Administración.

El Defensor del Pueblo tiene como misión la de colaborar a la reforma, que todos los sectores de esta Cámara han reconocido como necesaria, de la Administración a través de la reforma de los hábitos de conducta de la Administración, a través de la recepción de las quejas de los ciudadanos en relación con la conducta de la Administración, a través de las proposiciones que el Defensor del Pueblo pueda hacer para, incluso, reformas legislativas, aparte de la importante función que, como órgano neutral de colaboración con la garantía de los derechos fundamentales, tiene el Defensor del Pueblo, que está legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad y que está legitimado para interponer recursos de amparo.

Entiendo, señor Presidente, que en la consolidación de la organización del Estado democrático, que se prevé en la Constitución, es importante el paso que acabamos de dar. Estamos seguros que la contribución que la segunda Cámara, el Senado, haga a la reflexión sobre esta proposición de ley sea una reflexión que mejore, que perfile y que complete el trabajo que aquí estamos haciendo, y estoy seguro que si hay alguna enmienda que tengamos ocasión de examinar posteriormente, esas enmiendas que procedan del Senado serán también concurrentes a reforzar esta institución del Defensor del Pueblo, que es una garantía para los derechos de los ciudadanos, cosa que creo que debe congra-

tular a esta Cámara, a todos sus componentes y, desde luego, congratula y alegra sobremanera al Grupo Parlamentario Socialista en nombre del cual tengo el honor de hablar.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Comunista, y para explicación de voto, tiene la palabra el señor Solé Tura.

El señor SOLE TURA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo ha votado afirmativamente casi todos los artículos del texto definidos por la Comisión Constitucional con una sola excepción que es la del artículo 11, antiguo artículo 14.

Nuestra posición ha sido clara. Presentamos ya pocas enmiendas en el momento que el Grupo Parlamentario Socialista formuló su proposición de ley porque estábamos sustancialmente de acuerdo con el texto de la misma, y, en todo caso, las escasas enmiendas que nuestro Grupo presentó tendían a aumentar las posibilidades de intervención y control del Defensor del Pueblo y la eficacia de su intervención, puesto que sabemos la extrema dificultad de la tarea con la que se va a encontrar ante una Administración que es tradicionalmente centralista y poco permeable.

La mayoría de nuestras enmiendas han sido aceptadas y por eso no hemos mantenido ninguna para el Pleno. Sin embargo, quisiera hacer expresión de una reserva que es la que ha motivado nuestra abstención ante el artículo 11, antiguo 14, como antes decía.

Este artículo contempla un problema serio que es el de la relación del Defensor del Pueblo con la actividad de las Comunidades Autónomas, y tengo que decir, de paso, que me parece que en el artículo, tal como ha quedado aprobado, hay un cierto error, puesto que debería decir: «La actividad de la administración de las Comunidades Autónomas.» Y a eso se refiere el conjunto del texto. Así lo entiendo, por lo menos yo.

Ahora bien, resulta que en las Comunidades Autónomas, en tres de ellas (ya hay dos en funcionamiento con estatutos ya aprobados y otra, la gallega, con un estatuto en trance de aprobación) figura también la concepción de la institución del Defensor del Pueblo. En el artículo 15 del Estatuto Vasco la institución está claramente delimitada, aunque sin nombre específico. En el artículo 35 del Estatuto Catalán

figura con un mayor detalle y con una denominación específica. En el artículo 14 del Estatuto Gallego, que todavía no ha sido refrendado, figura sin nombre específico.

El artículo 14 establece un sistema complejo, pero que, a nuestro entender, respetaba plenamente el principio de la autonomía de las Comunidades Autónomas, puesto que sin tener competencia directa en ésta del Defensor del Pueblo, podía intervenir en caso de notoria gravedad a través de mecanismos que dejaban a salvo el principio de autonomía.

La actual redacción del artículo 11 puede ser fuente de conflictos, pues las atribuciones análogas de la Comunidades Autónomas pueden quedar subordinadas al Defensor del Pueblo y, en todo caso, no existirá tanto la coordinación y la cooperación, de que tanto se habla en el apartado 2 del artículo 11, sino más bien una auténtica subordinación, y esto puede dar lugar a tensiones, interferencias, malentendidos y pensamos que habría sido mejor mantener el texto inicial, sobre todo en una institución como ésta, que no está todavía rodada y que debiera funcionar con gran energía y con gran delicadeza, dado su carácter predominantemente moral, y sobre eso creo que no hay engaño posible.

También hubiéramos preferido que se mantuviese el artículo 17, suprimido, que permitía una relación del Defensor del Pueblo con los altos cuerpos consultivos de la Administración. Se adujo, para suprimirlo, que existía una doble consulta, pero entendemos que el Defensor del Pueblo debe tener abiertas todas sus posibilidades.

Por lo demás, hemos votado a favor de la última enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Andalucista como disposición final, puesto que nos parece que habría sido mejor delimitar claramente el plazo de tres meses para el nombramiento del Defensor del Pueblo.

Pero, dicho esto, la ley, tal como ha quedado, creemos que es una buena ley. Nuestro Grupo se cree en el deber de felicitar al Grupo Parlamentario Socialista por la iniciativa que tuvo al presentarla, y creo que se autofelicita también, en tanto que parte del Congreso de los Diputados, porque es la primera ley orgánica que procede de iniciativa parlamentaria y no del Gobierno.

El problema va a ser ahora —y sobre eso no nos engañemos, señoras y señores Diputados—

su puesta en práctica. Sabemos que va a ser una institución de difícil introducción en el esquema de la Administración española, y por eso es necesario potenciar al máximo la figura del Defensor del Pueblo, dotarla de medios, y es necesario, también, realzar su altura moral y su prestigio. Esa va a ser una tarea dura, una tarea difícil, porque se va a encontrar entre la impermeabilidad de un gran sector de nuestra Administración y la desconfianza de una población habituada a ser tratada más bien como súbditos que como ciudadanos.

Pensamos que para eso es necesario, no sólo potenciar esa figura, sino, al mismo tiempo, darle el máximo prestigio y el máximo apoyo, cosa que deberá verse también en el momento en que procedamos a su elección.

Gracias, señoras y señores Diputados.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, para explicación de voto, tiene la palabra el señor Fraga.

El señor FRAGA IRIBARNE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, creo, efectivamente, que debemos felicitarlos del final de este proceso legislativo, en el cual ha quedado organizada la institución del Defensor del Pueblo, que, como dije en la votación final del texto constitucional, es evidentemente la única que no figuró nunca en las Constituciones anteriores de España.

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha presentado una buena proposición de ley; lo ha hecho después de un estudio importante, encargado —si no me equivoco— al profesor Gil-Robles, y quiero aprovechar esta ocasión para rendir un público tributo al hombre ilustre que estaba detrás y que esta Cámara, quizá, hubiera debido recordar en otro momento.

Y dicho esto, añadiré que es cierto que esta proposición de ley socialista ha sido un poco obra de todos. El texto que ha salido creo que mejora sustancialmente el que entró en la Comisión, y entiendo que nuestro Grupo ha contribuido de forma sustancial, por muchas enmiendas que fueron aceptadas. Porque ha salido más precisa la institución, más deslindadas sus facultades, totalmente claras respecto de administraciones como la militar y, muy especialmente, respecto de evitar toda interferencia

en cuanto al Poder judicial, cosa que posiblemente no hubiera podido decirse del proyecto inicial.

Recordar, una vez más, que la palabra misma, creo que traducción acertada y mejorada de la escandinava «Ombudsman», se debe a nosotros. En el programa común de Alianza Popular de 1977, página 25, se decía: «Se declara la figura del Defensor del Pueblo, cuya misión será la de proteger las libertades públicas de los ciudadanos, defenderlos de los posibles abusos de la Administración, vigilar el cumplimiento de las leyes, humanizar las relaciones con los organismos del Estado y denunciar las deficiencias o lagunas legales.» Y en el texto que tuve la honra de entregar como ponente a la Comisión Constitucional en 1978 se decía: «Una Ley Orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo («Ombudsman») como Alto Comisionado parlamentario para la defensa de los derechos de los españoles y de que sus deberes ciudadanos serán exigidos de modo recto y no discriminatorio.»

Quiero decir que me sumo a la alegría de todos en este momento, y, finalmente, como se habrá observado, justamente por esta razón no hemos votado en contra ni nos hemos abstenido en ninguno de los artículos, y debo decir que no compartimos las preocupaciones que han sido expresadas por el ilustre representante del Grupo Comunista, sobre todo en un punto que ya ha dado lugar a algunas consultas hoy en esta Cámara, y en el cual creemos que la ley está, a nuestro juicio, bien redactada.

No puede imaginarse, en nuestra opinión, que la existencia de instituciones como el síndico de agravios u otras semejantes en los Estatutos ya aprobados, Catalán, Vasco y Gallego, puedan impedir el funcionamiento normal del Defensor del Pueblo en las Comunidades Autónomas. Y la razón es obvia: si fuese otra la interpretación, únicamente en la capital, en la villa de Madrid, podría intervenir en ese momento, puesto que dentro de poco —entiendo yo— esperamos que todas las comunidades sean autónomas, dentro de la unidad de España.

Por esta razón, quiero subrayar que es muy importante dejar claro que justamente para defender uno de los fines principales para los que creamos esta institución, que es la defensa de la unidad y de la igualdad de todos los españoles, es imprescindible que la misma pueda

funcionar por igual dentro de todo el territorio nacional.

Dicho esto, reitero la satisfacción de nuestro Grupo y nuestra más cordial felicitación al Grupo Socialista y muy especialmente a su ilustre portavoz, el señor Peces-Barba, que creo que hoy realiza uno de los grandes días de su vida parlamentaria.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, y para explicación de voto, tiene la palabra el señor Vizcaya.

El señor VIZCAYA RETANA: Señor Presidente, Señorías, ante todo, mi Grupo Parlamentario desea reiterar, como lo han hecho otros Grupos, nuestra felicitación al Grupo Parlamentario Socialista y, en concreto, a su Diputado don Gregorio Peces-Barba, auténtico motor de esta proposición de ley.

Esta felicitación tiene un doble motivo: en primer lugar, porque se ha presentado, y, en segundo lugar, por su final feliz, habida cuenta de la trascendencia que tiene el hecho de que la iniciativa legislativa de un Grupo desemboque por primera vez en una Ley Orgánica.

Señorías, yo quisiera contrastar el júbilo del día de hoy, en que hemos conmemorado el trigésimo aniversario de la Convención Europea de los Derechos Humanos y aprobado una ley que establece un medio de defensa de los derechos del individuo reconocidos en nuestra Constitución, con el Pleno de hace quince días, en el que, forzados por hechos ajenos a esta Cámara, nos veíamos obligados a restringir derechos. Creo que es bueno recordar este contraste, porque quizá de aquella sesión quedase un sabor amargo en cuanto a la defensa por esta Cámara de los derechos del ciudadano.

Pienso que la ley que acabamos de aprobar nos coloca en la vanguardia de aquellos países cuya legislación, sea constitucional o no, regula una institución semejante a la del Defensor del Pueblo, como puede ser el «Ombudsman». Y también pienso que esta institución, regulada en la ley que acabamos de aprobar (o que se aprobará a partir de las nueve de la noche, en votación de conjunto), si bien acercándose a la institución arquetípica de Suecia, cuna de esta institución, del «Ombudsman», no obstante, va más allá y supera con creces la legislación al

respecto de Francia, Gran Bretaña y, recientemente, Portugal.

La necesidad de garantizar cada vez más los derechos individuales frente al cada vez mayor poder de las administraciones públicas hace que veamos con especial esperanza la puesta en práctica, la aplicación de esta ley, que queremos que sea pronto.

Y también estamos esperanzados en que, junto al Defensor del Pueblo, de ámbito estatal, se desarrollen pronto instituciones semejantes ya contempladas —como decían los señores Diputados que me han precedido en el uso de la palabra— en los Estatutos Vasco, Catalán y Gallego, en vía éste de refrendo popular. Y no solamente a este nivel de nacionalidades sería necesaria esta figura, sino que también queremos que, a nivel supraestatal, se lleva a buen puerto el deseo del Parlamento Europeo de constituir esa figura del Comisario Parlamentario Comunitario a que hace referencia la resolución de junio de 1979 del Parlamento Europeo.

Termino, Señorías, felicitándome de este hecho y contrastando con júbilo la diferencia de objetivos que esta Cámara ha tenido respecto de otras anteriores sesiones.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Centrista, y también para explicación de voto, tiene la palabra el señor Alzaga.

El señor ALZAGA VILLAAMIL: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, para, en el mismo tono de siempre y con la mayor brevedad posible, explicar nuestro voto, que ha sido un voto sin reservas, con plena orfandad de enmiendas vivas de la Unión de Centro Democrático, en una sesión en la que se culmina un trabajo legislativo especialmente grato sobre una proposición de ley socialista, que, sin tacañería alguna y con auténtica verdad, hay que calificar de una proposición de ley de una técnica legislativa muy estimable, muy elogiabile.

Nosotros nos sumamos de muy buen grado a los elogios que aquí se han vertido en la tarde de hoy a la obra prelegislativa del buen administrativista don Alvaro Gil-Robles, así como a los elogios que aquí se han dirigido en conjunto al Grupo Parlamentario Socialista y a su portavoz, el señor Peces-Barba, al que no obstante le

hemos visto tan orondo en elogios anteriores, que no insistiremos en demasía.

Realmente sobre esta buena proposición de ley se ha hecho por la Ponencia un trabajo que, como ya se ha calificado, ha sido concienzudo, un trabajo de pulimento, con calma y esmero, que quizá pueda muy probablemente continuarse y terminar de perfeccionarse por la Alta Cámara.

Nosotros queremos, sin embargo, hacer, en primer lugar, una afirmación, que es la de que no podemos compartir las afirmaciones que ha vertido hace breves minutos el digno representante del Grupo Parlamentario Comunista en torno al artículo 11 de la proposición de ley que nos ocupa, afirmaciones por lo demás vertidas en momento procedimental singular, porque no han sido sostenidas ni en Ponencia ni en momento procesal pertinente en este mismo Pleno, y creemos que no podemos coincidir con la tesis de que no corresponde al Defensor del Pueblo, como Delegado de las Cortes Generales, intervenir en el ámbito territorial propio de las diversas Comunidades Autónomas, porque, por imperativo del artículo 54 de la Constitución, es finalidad específica y primordial de esta institución que hoy estamos reglando la defensa de los derechos consagrados en el Título I de la Constitución. Y el artículo 149.1 de nuestra norma política fundamental, como Sus Señorías saben mejor que yo, afirma que el Estado tiene competencia exclusiva, entre otras materias: primera, sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, amén de que otros preceptos, que no es preciso subrayar ante Sus Señorías, establecen, como por ejemplo el artículo 139.1, que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

Consiguientemente, en esta materia está harto justificado que la Magistratura que estamos en estos momentos contribuyendo a reglar, de conformidad con instituciones similares que se creen con arreglo a lo previsto por la Constitución y por los Estatutos de Autonomía que están siendo objeto de redacción, en colaboración con las mismas, repito, actúe en defensa de esos derechos que son iguales para todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional.

Porque no hay que olvidar que no estamos aquí hoy, en esta Cámara, creando la institución del Defensor del Pueblo. Es una institución que está creada por la Constitución, que la misma nos da, en los artículos 54, 162 y 70 especialmente, ciertas notas precisas de en qué consiste esa institución y que sólo nos corresponde aquí proceder a regularla por vía de Ley Orgánica, según nos encomienda el reiteradamente citado artículo 54.

Yo querría en esta explicación de voto, tan brevemente como sea posible y dado que mi Grupo Parlamentario no ha hecho prácticamente uso de la palabra en el Pleno de hoy, explicar cuáles son las líneas básicas o los criterios fundamentales que han presidido el trabajo nuestro, sobre todo en Ponencia, en torno a esta proposición de ley. Afirmaremos en primer término que el Grupo Parlamentario Centrista ha partido de una gran premisa: la de dotar al Defensor del Pueblo de la máxima «autoritas» posible.

Nosotros pensamos que, ante todo, el Defensor del Pueblo está concebido en nuestra Constitución como una magistratura de opinión capaz de adentrarse, por tanto, en la crítica no sólo de acciones, de conductas que puedan estimarse ilegales, sino también de comportamientos que quizá entran dentro del marco formal de la ley, pero que sean ineficaces, morosas o, en ocasiones, incluso contrarias a la ética y que puedan afectar a los derechos y libertades de los españoles. Estamos ante una magistratura de opinión, a nuestro parecer, porque sus resoluciones en principio no son directamente obligatorias pero deben estar dotadas de una especialísima autoridad. Creemos que es una magistratura que debe contar —como cuenta en esta proposición de ley— con una independencia básica, incluso de las Cortes Generales de las que emana, porque ha de estar al margen de la lucha política cotidiana, precisamente porque tiene que ser una magistratura especialmente objetiva y, por tanto, no sometida a los vaivenes de opinión que caracterizan a todos los partidos políticos.

De aquí que nuestro Grupo Parlamentario no haya objetado el hecho de que la elección del Defensor del Pueblo se efectúe, no por la mera mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno, sino por la mayoría cualificada de tres quintos. No hemos pretendido implantar un

Defensor del Pueblo que sea reflejo de la mayoría de Gobierno, sino capaz de controlar con independencia la acción de la Administración.

Para nuestro Grupo Parlamentario, en consecuencia, la faceta judicial —valga la expresión— del Defensor del Pueblo es complementaria de la anterior, y aunque no desconocemos la legitimación que le reconoce la misma norma política fundamental para interponer el recurso de amparo y el recurso de inconstitucionalidad, por así preverlo el artículo 162 de nuestra Constitución, nuestro Grupo Parlamentario ha limitado, ha recortado su acción cerca del Poder judicial para evitar interferencias entre el Defensor del Pueblo y la Justicia contencioso-administrativa u otros Juzgados o Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria. Hemos tenido especial interés en garantizar que nadie se inmiscuya en la independencia de jueces y Tribunales que garantiza el artículo 117 de la Constitución.

Otros criterios de fondo que han presidido nuestro trabajo en torno a esta proposición de ley han sido, en primer lugar, el que en ningún momento hemos comulgado con lo que podríamos llamar una cierta fe ingenua o pueril en los efectos taumatúrgicos de esta institución. Nosotros creemos que de esta institución cabe y deben esperarse efectos positivos, pero efectos positivos limitados, según nos enseñan las experiencias extranjeras más próximas. Hemos contribuido a la puesta en marcha de la institución desde una actitud rabiosamente realista, porque los centristas comulgamos con lo que podría llamarse una razonable insatisfacción por ciertas prácticas de nuestra función pública que puedan afectar a derechos y libertades. Tenemos plena conciencia de la dificultad de solventar muchas veces estas deficiencias, según nos enseña la politología moderna, desde el Gobierno o incluso desde el Parlamento. Mi Grupo Parlamentario, desde ese realismo, sabe que la acción parlamentaria de control tiene límites naturales, y mejor que nosotros quizá lo sepan ciertos grupos de la oposición, que son a los que les corresponde en este momento histórico asumir el rol de control del Gobierno. Y ese control parlamentario tiene límites por problemas de insuficiente información, en ocasiones, por la singularidad del juego mayoría-oposición y, muy especialmente, por la escasa flexibilidad de ciertos procedimientos parlamentarios.

Nosotros creemos, en consecuencia, que el gran valor complementario de la institución del Defensor del Pueblo se deriva de su autoridad —que no nos cansamos de subrayar—, de su funcionamiento informal y ágil, más ágil que el que debe caracterizar a esta Cámara, y que puede y debe llevar a cabo labores no sólo complementarias, sino previas, de las de control propiamente dicho que corresponden a las Cortes Generales.

Pero querría, antes de terminar, subrayar una idea que es consustancial a nuestro planteamiento sobre la institución del Defensor del Pueblo. Para el Grupo Parlamentario Centrista el Defensor del Pueblo es un colaborador crítico de la Administración y no una institución emplazada en oposición dialéctica frente al funcionariado. Si no entendemos todos este sentido de colaborador crítico de la institución del Defensor del Pueblo creo, sinceramente, que corremos el riesgo de que su propia existencia y, en consecuencia, la expectativa de su posible intervención en torno a toda acción administrativa conlleve efectos paralizantes sobre una Administración pública que, hablando con la sinceridad que debemos todos emplear en esta Cámara, no brilla precisamente por su dinamismo.

Es absolutamente fundamental que el Defensor del Pueblo sea un auténtico colaborador de la Administración, que ha de lograr que esa Administración, que tiene una carga de inercia histórica e importante en cuanto a ciertos métodos de funcionamiento, alcance en la nueva situación democrática una mayor predisposición, una mayor preocupación por el respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y esto no es incompatible, sino perfectamente coherente, con que la labor del Defensor del Pueblo, a la par, busque y logre que la Administración Pública, las Administraciones Públicas, sean cada vez más funcionales. Sólo así contribuirá la nueva institución al mayor prestigio del poder político ante la opinión pública.

Eso es tanto como decir que contribuirá a la legitimación cotidiana del Estado. Y esa legitimación cotidiana del Estado es una pieza básica para consolidar el sistema político democrático que estamos todos, pieza a pieza, construyendo.

A todo ello mi Grupo, y creo que todos los demás que con anterioridad a este momento han explicado su voto favorable, ha querido servir

contribuyendo a la elaboración de esta importante Ley Orgánica y dándole su voto favorable.

Nada más, y muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, y para explicación de voto, tiene la palabra el señor Gómez de las Rocas.

El señor GOMEZ DE LAS ROCES: Muy brevemente, para unirme, en nombre de todos los componentes del Grupo Mixto, a esta general y común felicitación y añadir, en nombre de mi partido, el Partido Aragonés, que el origen de esta figura del Defensor del Pueblo no está muy lejos y no es de importación. Está en el Justicia Mayor de Aragón. Nada más.

— DE LA COMISION CONSTITUCIONAL, SOBRE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DEL PARRAFO 4 DEL ARTICULO 8.º DE LA LEY ORGANICA REGULADORA DE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE REFERENDUM.

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión Constitucional sobre la proposición de ley de modificación del párrafo 4 del artículo 8.º de la Ley Reguladora de las distintas modalidades de referéndum.

Al artículo único de esta proposición de ley mantiene una enmienda el señor Clavero Arévalo, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra para su defensa el señor Clavero.

El señor CLAVERO AREVALO: A esta enmienda, concretamente, renuncio.

El señor PRESIDENTE: Pero, ¿se somete a votación?

El señor CLAVERO AREVALO: No, queda retirada.

El señor PRESIDENTE: Retirada la enmienda del señor Clavero al artículo único de esta proposición de ley.

Mantiene asimismo una enmienda el Diputado señor Gómez de las Rocas, del Grupo Parla-

mentario Mixto, que tiene la palabra para su defensa.

El señor GOMEZ DE LAS ROCES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la enmienda que propongo en nombre de mi Partido, el Partido Aragonés, no tiene otro propósito que el de restaurar el sentido estricto de los artículos 151 y 143 de la Constitución; sentido que ha sido desvirtuado, a nuestro juicio, por el artículo 8.1 y por la transitoria segunda de la Ley Orgánica sobre las distintas modalidades de referéndum.

Nadie está tan obligado a guardar la Constitución como las Cortes Generales y, sin embargo, creo que, con motivo de discutirse aquella ley orgánica, la Constitución no salió bien parada y, quiero creer que sin intención de hacerlo, se alteraron gravemente las previsiones contenidas en aquellos artículos sobre el tema de la iniciativa autonómica. Es posible que fuera la prisa, y no otra circunstancia, la causa de que, cuando se aprobara la Ley Orgánica del Referéndum, se modificase sustancialmente el sentido constitucional de esa iniciativa. Hubo demasiada prisa y hay también demasiada prisa a veces y excesiva pausa en otras; hay demasiada improvisación en las soluciones que a veces se nos proponen desde esta misma tribuna, para tener que rectificarlas por inviables poco más tarde. Estáis desarrollando la Constitución sin otro norte principal que el de acomodarla a cada emergencia política y sin que se advierta el escrupuloso respeto que la Constitución se merece.

Veamos dónde está la razón de la enmienda que pido a la Cámara que haga suya. Con arreglo a los estrictos términos de la Constitución, la iniciativa autonómica se alcanza cuando coinciden en ella, en el plazo de los seis meses del primer acuerdo, las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia. Esto en el caso del artículo 143. En el supuesto del artículo 151 hace falta que esos acuerdos lo sean de tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas y que también representen aquella mayoría del censo electoral.

Como puede advertirse, la Constitución fijó un criterio meramente cuantitativo, no volitivo, en sus resultados, elaborado con dos elementos: el número de municipios, proporcionado al total de los del territorio, y la población; de suerte que si

sobre la base de tales componentes no se alcanzaban al menos los dos tercios de los indicados acuerdos, tampoco se podía entender promovida la iniciativa autonómica. Si se alcanzaban esos dos tercios, sólo era posible la del artículo 143, y si se alcanzaban las tres cuartas partes era posible, finalmente, que la iniciativa autonómica discurriera por el procedimiento del artículo 151, denominado de autonomía plena.

El esquema constitucional era simple, casi simplista: reconducía el problema de la iniciativa autonómica a una solución de regla aritmética y, por tanto, exacta. Por eso, al menos servía para expresar cuál sería el camino según las proporciones obtenidas en la adopción de los correspondientes acuerdos municipales. La promulgación de la Ley Orgánica del Referéndum ha trastornado, a nuestro juicio, y además gravemente, ese esquema claro aunque elemental de la Constitución.

El artículo 8.º de la Ley Orgánica del Referéndum señaló que la ratificación por referéndum de la iniciativa autonómica, prevista en el artículo 151, se ajustaría a los términos que mencionaba, y en el número 1 de aquel artículo, tras enumerar las exigencias ya contenidas en el 151 de la Constitución, añadió lo que no figuraba en ésta; es decir, que los acuerdos se adoptarían haciendo constar que se ejercitaba la facultad otorgada por el artículo 151 de la Constitución. Esto es, en la Ley Orgánica del Referéndum se añade un requisito que no figura en la Constitución, consistente en que las Corporaciones locales, para motivar el acceso a la vía autonómica del artículo 151, no puedan limitarse, como decía el artículo 151, al acuerdo de iniciativa, sino que deben expresar específicamente que quieren ir por ese precepto, cosa que, por otra parte, no se exige para el caso del 143.

Las consecuencias son, a nuestro juicio, evidentes. El criterio cuantitativo que la Constitución señala ya no basta, a pesar de la Constitución, para la iniciativa del artículo 151. Es decir, no es suficiente que el número de acuerdos municipales alcance las tres cuartas partes para que se pueda ir por la vía del artículo 151. No se juzga ahora la conveniencia o inconveniencia del requisito; simplemente se constata que la Ley Orgánica del Referéndum lo añade y que en absoluto lo exigía la Constitución, ni ésta autorizaba para añadirlo.

Otra consecuencia es que hace falta, por tanto

—y antes no se exigía—, la expresada declaración de querer ir por la vía del artículo 151 y de que lo diga cada uno de los acuerdos de aquellas corporaciones locales. Ni siquiera se respetan las situaciones anteriores, esto es, los acuerdos corporativos que ya habían sido adoptados antes de entrar en vigor la Ley Orgánica del Referéndum.

Efectivamente, la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica señala que a la entrada en vigor de esa ley y a los efectos de la tramitación de las iniciativas autonómicas, se abriría un plazo de 75 días, con el fin de que las corporaciones y entes locales interesados pudieran proceder a la rectificación de los acuerdos en función de los términos de dicho precepto; en otras palabras, se hablaba de rectificar cuando con arreglo a la Constitución —norma no sólo suprema, sino única en el tiempo de adoptar aquellos acuerdos— nada había rectificable en los acuerdos municipales que se hubieran limitado a hacer constar el propósito corporativo de que se iniciase el proceso autonómico, sin expresar preferencia por una u otra vía. En definitiva, si con arreglo a la Constitución bastaba la acumulación cuantitativa de tres cuartas partes de acuerdos municipales para que fuese posible automáticamente la vía del artículo 151, la Ley Orgánica, con constitucionalidad más que dudosa, añadió una nueva exigencia a las ya de por sí penosas exigencias del artículo 151.

Soy consciente de cuál es el destino más que probable de esta enmienda, porque el criterio mayoritario de la Ponencia es opuesto a que prospere, sin que ni siquiera conozcamos las razones. Simplemente sabemos que están, según el dictamen de la Ponencia, en contra de esta enmienda los Grupos Parlamentarios de UCD, Socialista, Socialistas de Cataluña y Minoría Catalana. A pesar de todo, esta enmienda tendrá por lo menos, si no se consigue su objetivo, el valor de una denuncia escrita, y dicho queda, contra quienes hablan de autonomía al tiempo que la cercenan; contra quienes hacen aquí cosa bien distinta de la que van predicando por allá, y contra quienes sólo quieren que haya autonomía para ellos.

Si esta enmienda no prospera, está claro que el artículo 8.1 y la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica del Referéndum no se introdujeron por error, sino intencionadamente;

es decir, con el propósito de dividir para vencer o, lo que es lo mismo, con la idea de evitar que todos los territorios, a pesar de lo que se predica, puedan obtener el mismo grado de autonomía.

Contra lo que se va diciendo por ahí, interpretando la Constitución al gusto de cada auditorio, no es cierto que el artículo 143 asegure de presente, o por el simple transcurso de cinco años, el mismo grado de autonomía que el artículo 151, o que la privilegiada disposición transitoria segunda de la Constitución. No es cierto. Por eso, la Ley Orgánica, tal como está redactada, sin la enmienda que proponemos, impedirá a los demás territorios que obtengan de inmediato un nivel autonómico similar a los concedidos o en trance de serlo, o sea, que hará a esos territorios de peor condición. Si fuera la voluntad de cada uno de esos territorios la que decidiese adoptar la vía del 143, no habría en absoluto nada que oponer; pero cuando no es esa voluntad, sino una voluntad ajena, que acumula dificultades, que impone la obligación de ir por tal camino, tenemos que denunciarlo y dejar constancia de que nosotros, al menos, no vamos a conformarnos.

Nadie desconoce que hasta ahora la autonomía no se ha puesto en marcha más que en los territorios que optaron por forzar abruptamente la resistencia al inicio de ella. Sería útil que quienes siguen resistiéndose a la autonomía de los demás territorios, con connivencias harto explicativas, supieran que no dejan a las demás nacionalidades o regiones más que la alternativa de resignarse o de violentarse. Lo menos que podemos pedir es que sepan, al menos, que ésa es la responsabilidad que les podremos imputar.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra de esta enmienda? (*Pausa.*) Tiene la palabra el señor Cisneros.

El señor CISNEROS LABORDA: Con la venia, señor Presidente, voy a intentar suplir con humildad, no sé si con suficiencia, este déficit del informe de la Ponencia a que se refería el señor Gómez de las Rocas.

No es un secreto para nadie, y no debe serlo, desde luego, para el señor Diputado enmendante, que la proposición de ley que debatimos es el fruto y la cristalización de un laborioso

acuerdo político alcanzado, tras ardua negociación, por las fuerzas políticas que suscriben la proposición en presencia, y que dicho acuerdo apunta a una finalidad específica cual es la de retomar e impulsar el proceso autonómico andaluz.

Desde esta afirmación y desde esta perspectiva podíamos empezar por decir que la enmienda del señor Gómez de las Roces introduce un factor marginal, ajeno a la intención de los proponentes y al objeto propio de la proposición de ley. Esta primera reflexión, que es una reflexión estrictamente política, podría erigirse en una primera línea argumental para postular el rechazo de la pretensión del señor Diputado enmendante.

No se nos oculta, sin embargo, que esta abrupta línea argumental puede no bastar ni satisfacer al señor Diputado, porque las normas jurídicas, cualesquiera que sean las circunstancias que concurren en su proceso de elaboración, tienen una voluntad de abstracción, una voluntad de generalidad, una voluntad de permanencia, y así es bien legítimo que el señor Gómez de las Roces, al hilo de la oportunidad que le depara esta proyectada modificación de la Ley de Modalidades de Referéndum, intente hacer valer de nuevo una iniciativa que ya sostuvo fallidamente con ocasión del dictamen por este Pleno de la propia Ley Orgánica que ahora se intenta modificar.

También por estas mismas razones es obligado que quienes nos oponemos a esa pretensión procuremos considerar y profundizar en las razones que la animan aun cuando sea, desde luego, para razonar por qué no las entendemos susceptibles de consideración.

El señor Gómez de las Roces pretende, como saben Sus Señorías, la derogación retroactiva del requisito señalado en el número 1 del artículo 8.º de la Ley de Modalidades de Referéndum, en virtud del cual se requiere que en los acuerdos adoptados por Diputaciones y Municipios en el ejercicio de su derecho a la autonomía, se haga constar de forma explícita que la facultad que se ejerce lo es al amparo del artículo 151 de la Constitución, y pretende, correlativamente, la supresión de la disposición transitoria segunda de aquella ley por la que se habilitaba un plazo para que las Corporaciones acomodasen los términos de sus acuerdos a la concreción requerida por ese mismo texto legal.

Sostuvo el señor Gómez de las Roces entonces, y reproduce ahora, que dichas exigencias de concreción enrarecían el esquema de derecho a la autonomía configurado por la Constitución. Sin embargo, en nuestra opinión, la Ley de Modalidades de Referéndum no vino a añadir exigencia nueva alguna a los requisitos constitucionales, sino que se limita a formular, a concretar un principio de opción implícito en la propia Constitución, y, lógicamente, formula esta concreción partiendo del principio de que lo excepcional no se presume, y partiendo, lógicamente, del principio aceptado por la ya significativa bibliografía de doctrina e interpretación constitucional de que el artículo 143 diseña el supuesto común, general y ordinario, de acceso a la autonomía, frente a la singularidad representada por el artículo 151. En la motivación de su enmienda, y aquí nos ha reproducido este argumento, el señor Gómez de las Roces (pienso que con algún apresuramiento, con ese mismo apresuramiento que él imputaba a los redactores de la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum) sienta el principio de que la Constitución se limita a señalar un criterio automático y no volitivo. Si sólo se alcanzan —nos dice— los dos tercios de los acuerdos, la iniciativa autonómica debe utilizar la vía del artículo 143; si se alcanzan los tres cuartos, debe emplear la del 151. No se oculta al señor Gómez de las Roces que semejante automatismo interpretativo produciría en la práctica el resultado, a todas luces absurdo —y no es una hipótesis salida de laboratorio, sino una hipótesis verificada y verificable en algunas Comunidades Autónomas—, de que una Comunidad regional en que el 100 por cien de los Ayuntamientos hubieran manifestado explícitamente su voluntad de acceder a la autonomía por la vía del artículo 143, en virtud de ese automatismo de la doctrina Gómez de las Roces, se vería condenada a configurarse con arreglo al artículo 151.

Pero junto a todas estas consideraciones —que eran válidas, pienso, en diciembre del año pasado, y que lo siguen siendo ahora—, se añade la extemporaneidad de la pretensión de la enmienda, que parece desconocer que hubo un plazo, no sé si suficiente o insuficiente, razonable o no, pero, en todo caso, un plazo superado con creces, para la matización de los acuerdos municipales, y que cualquier reapertura de ese proceso sólo serviría para añadir o aportar

confusión y complejidad en el difícil empeño de configurar el mapa autonómico español, cuyos perfiles parece empiezan ya a diseñarse con nitidez suficiente.

Concluyo reiterando una afirmación que ante alguna observación del señor Gómez de las Rocas es especialmente oportuna y que pienso debe formularse con especial contundencia, incluso con alguna solemnidad, en este momento en el que estamos a punto, previsiblemente, de modificar la Ley de Modalidades de Referéndum. Esta afirmación es que dicha ley era, y seguirá siendo después de su eventual reforma, impecablemente constitucional.

Las proposiciones de ley que esta tarde dictaminamos responden, entiendo, a un correcto esfuerzo interpretativo de nuestra Constitución para evitar que otra interpretación literalista contrapuesta pudiera provocar el resultado, no deseable ni deseado, de la frustración de la voluntad autonómica andaluza.

Nos parece evidente que cuando nuestra Constitución establece «quórum» cualificados y señala el requisito de que sean alcanzados en todas y cada una de las provincias que integran la proyectada Comunidad, lo que la Constitución está pretendiendo realmente decir es que no puede, en ningún caso, forzarse una voluntad provincial para integrarla coactivamente, contra su deseo, en una Comunidad regional; pero lo que la Constitución no ha podido querer decir es que a una provincia se le otorga o reconoce un derecho de veto para poder impedir la creación de una Comunidad Autónoma en torno a cuyo nacimiento se ha expresado la voluntad popular de una manera suficiente y significativa. A esta exégesis pensamos que responden las dos proposiciones de ley complementarias cuyo dictamen vamos a considerar hoy, y estimamos que ni desde un punto de vista jurídico parece convincente ni desde una perspectiva política parece necesaria la aceptación de la enmienda sostenida por el señor Gómez de las Rocas, por lo que, con el mayor respeto, nos permitimos solicitar de la Cámara su rechazo. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: El señor Gómez de las Rocas tiene la palabra en turno de rectificación.

El señor GOMEZ DE LAS ROCES: Muy brevemente, señor Presidente, para hacer unas

brevísimas acotaciones a lo expresado por el señor Cisneros manteniendo el mismo respeto que él ha sabido mantener hacia mis argumentos.

Por supuesto es evidente que no nos ha convencido; pero lo que no parece tan evidente para algunos es que cuando se hacen enmiendas es porque no se coincide con el criterio de los proponentes de la proposición de ley, porque en algún punto hay una diferencia que, por supuesto, no tiene nada que ver, señor Cisneros, con el deseo que todos tenemos, y yo también, de que prospere la autonomía andaluza, que si estaba detenida, no era por la voluntad del partido aragonés, sino por la voluntad del partido de UCD.

También quiero decirle que en la Constitución no hay, a mi juicio, principio implícito alguno que permita hacer lo que hace el artículo 8.º y aquella disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de distintas modalidades de referéndum.

El artículo 151 —yo no sé qué dirán los exegetas que haya leído, yo he leído otros— es manifiestamente un procedimiento ordinario, y extraordinario solamente lo es el de la disposición transitoria segunda y el del artículo 144 que UCD se proponía emplear, hasta hace pocas fechas, con un criterio harto discutible.

También quiero decirle que no he mantenido la conclusión que obtiene Su Señoría de mi afirmación sobre la voluntad de los municipios. He dicho, en la última parte de mi intervención, que si la voluntad de un territorio es acogerse a la fórmula del artículo 143 basta con que lo exprese y hay que respetarla, empezando, por supuesto, por la voluntad de la tierra a la que represento. Eso es indiscutible. Pero una cosa es que haya que tener esa voluntad y otra que se le imponga; y aquí estamos hablando no de una voluntad manifestada por ese territorio, sino de una voluntad que se impone por vía legal, aunque yo creo que no legitima, a esos territorios cuando no se ha empleado otra fórmula y cuando, además, no estaba en la Constitución.

Finalmente quiero decir formalmente, con la misma solemnidad, que aunque esta ley va a ser una ley constitucional, materialmente no estoy de acuerdo, y lo que más me temo es que si empezamos a ignorar la Constitución nosotros es posible que también la ignoren otros y no tengamos razones que oponerles. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cisneros en turno de rectificación.

El señor CISNEROS LABORDA: He pretendido, con evidente insuficiencia, convencer justamente o intentar, de algún modo, matizar o replicar a la intervención del enmendante respecto al punto y extremo de la rigurosa constitucionalidad de la Ley Orgánica de distintas modalidades de referéndum en su momento inicial u ordinario y en su momento modificado.

Yo entiendo que no se trata desde esta ley de imponer una voluntad; se trata justamente de integrar, completar y establecer la habilitación legal para la manifestación de la eficacia de esa voluntad. En último término no puedo dejar de subrayar ante la Cámara que, en la amplia respuesta contradictoria, el señor Gómez de las Rocas ha pasado por alto, sin embargo, el extremo de la extemporaneidad con respecto a la limitación de aquel plazo que quedó suficientemente cumplido para la corrección de aquellos acuerdos municipales.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.

Se somete a votación, en primer lugar, el texto del artículo único tal como figura en el dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 266; en contra, dos; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo único en los términos que figuran en el dictamen de la Comisión.

Sometemos a votación, seguidamente, la enmienda del señor Gómez de las Rocas, que propone la adición de un párrafo a este artículo único.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 32; en contra, 133; abstenciones, 102.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del señor Gómez de las Rocas al artículo único de esta proposición de ley.

Sometemos a votación, seguidamente, el texto

de la Disposición final, conforme al dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 270; en contra, uno; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Disposición final, en los términos que figuran en el dictamen de la Comisión.

El señor Clavero mantiene una enmienda por la que propone la incorporación de una Disposición transitoria. Tiene la palabra el señor Clavero.

El señor CLAVERO AREVALO: Señor Presidente, mantengo esta enmienda. Renuncio a defenderla verbalmente y pido que se someta a votación.

El señor PRESIDENTE: En esta enmienda, señor Clavero, se habla de los «referenda de ratificación». Con motivo de la ley reguladora de las distintas modalidades de referéndum, sometimos a estudio y consulta, con autoridades de la Real Academia, la conveniencia u oportunidad de utilizar una u otra de las posibles fórmulas que usualmente se utilizan, y la fórmula que se aplicó es la de «referéndum», sin «s», considerando que «referenda» es un cultismo; que «referéndums» fuerza las reglas gramaticales, y que «referendos», que era la otra forma utilizable, desplazaría en el plural la utilización del término latino por el término castellano.

Si les parece, para mantener la congruencia con la terminología que ya utiliza la ley relativa a las distintas modalidades de referéndum, diremos «a los referéndum de ratificación». ¿Están de acuerdo? *(Asentimiento.)*

Se somete a votación la enmienda del señor Clavero relativa a la incorporación de una Disposición transitoria.

Comienza la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 282; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda del señor Clavero. El contenido de la

misma pasará a ser el de la Disposición transitoria única de esta proposición de ley.

Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Comunista, tiene la palabra el señor Alcaraz.

El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, Señorías, para decir que nosotros, evidentemente, hemos votado de manera positiva la enmienda del señor Clavero, como la votamos, positivamente también, en Ponencia y en Comisión, prácticamente en solitario con el señor Clavero. Y la hemos votado así, de un lado, porque jurídicamente es irrevocable y, de otro, porque pensamos que no aporta confusión política alguna, sino al contrario, aporta seguridad jurídica y seguridad política.

Sin esta enmienda la Ley, en rigor, es inaplicable para Andalucía, dado el principio de irretroactividad de las leyes. Y no nos valía, en Ponencia ni en Comisión, el argumento de que no es conveniente, como alegó algún Grupo, sacar de nuevo este tema a la luz y a los taquígrafos, porque nosotros pensamos lo contrario. En una Cámara como ésta, donde a veces los taquígrafos, entre otros profesionales, defienden y representan la transparencia de que tan necesitada está esta Cámara —transparencia y protagonismo—, hoy los taquígrafos tendrán que registrar que UCD ha cambiado su voto, dando la razón a los comunistas y, sobre todo, naturalmente, al señor Clavero.

De otro lado, nos parecía jurídicamente aberrante la argumentación de que en esta norma existía una especie de retroactividad táctica, ya defendida por quien viene siendo definido, últimamente sobre todo, como el mejor ministro de UCD y que, paradójicamente, no es ministro ni de UCD.

Tampoco pensamos que era válido decir que en el preámbulo de la ley existe una referencia a Andalucía, ya que el preámbulo no tiene ningún valor legal.

Asimismo, no estamos de acuerdo con la tesis de que aprobar una enmienda significaría cambiar el acuerdo político logrado, argumento que empleó otro Grupo para rechazarla y que, sin embargo, aprobó en Comisión la enmienda número 3 del señor Clavero.

Así pues, esta enmienda, en puridad jurídica, nos parecía, concretamente a nosotros, totalmente indiscutible. Y nos parece que aprobar

esta enmienda es lo que mejor cuadra con el afán de rigor que debe presidir este Congreso.

Por tanto, debemos entender las razones partidistas que han podido llevar a ciertos grupos a rechazar esta enmienda en Ponencia y en Comisión, pero no comprendemos las razones jurídicas y auténticamente políticas de estos grupos. Si, en definitiva, se trata de restarle protagonismo al señor Clavero, ¿no se le ha dado más rechazando su enmienda en Comisión y permitiéndole que venga esta enmienda aquí, al Pleno del Congreso?

De todas formas, para terminar, nos alegramos de que UCD haya cambiado su voto, aunque suena un poco como a milagro que UCD tenga reflejos para rectificar a tiempo y dar la razón a quien la tenga, sea quien sea.

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Centrista, tiene la palabra la señora Becerril.

La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Señor Presidente, mi Grupo Parlamentario consideraba que no era necesaria una explicación de voto y no pensaba hacerla, pero ante las manifestaciones hechas por el portavoz del Partido Comunista creemos conveniente, y además de pura cortesía parlamentaria, responder a algunas de las cosas que aquí se nos han dicho.

Nosotros hemos venido manteniendo que la proposición de ley que ahora estamos debatiendo, junto con la otra proposición de ley que a continuación estudiaremos, eran unas proposiciones buenas y convenientes, concretamente para desbloquear el proceso autonómico andaluz. Creo que buena prueba de ello fue el que todos los partidos políticos suscribieron estas proposiciones y que personas que no lo hicieron a título de grupo si lo hicieron a título individual, y además inmediatamente a la presentación de estas proposiciones en el Congreso.

El mantenimiento de las tesis que hemos venido haciendo a lo largo de los trabajos de Ponencia y de Comisión, de no modificar las proposiciones en todo aquello que no fuera absolutamente necesario, no se debía al hecho de que fuera un acuerdo político, que es algo bueno, saludable y conveniente, como así lo han reconocido todos los partidos, sino al hecho de que siendo una proposición buena, siendo una proposición que tenía el voto de todos y que nos

convencia de que hacía posible desbloquear el proceso autonómico, no era necesario modificarla, no era absolutamente imprescindible la modificación, y por ello quisimos ganar tiempo, evitando este trámite de ahora y otros que pudieran seguir como consecuencia de la enmienda.

Nosotros, por tanto, creímos y seguimos creyendo que son unas proposiciones buenas, que son unas proposiciones que, puesto que no tienen aplicación en este momento para referendums anteriores al de iniciativa andaluz, van directamente a desbloquear la situación autonómica de Andalucía; que después de la modificación de estas leyes queda abierto y limpio el camino que hasta ahora impedía la continuación del proceso autonómico andaluz.

Estas han sido las razones fundamentales para estimar que no era conveniente modificar estas proposiciones, proposiciones que, como todo lo que viene a esta Cámara, son perfectibles. Pero ahora no tenemos inconveniente en cambiar nuestra posición, porque lo que no quería en ningún momento nuestro Grupo Parlamentario, y de un modo especial el grupo de Diputados andaluces, es que pudiera quedar flotando en el ambiente de esta Cámara la idea de que en un futuro algunas personas pudieran dudar de la aplicación de esta ley para el supuesto, para el hecho andaluz.

Como saben muy bien todas Sus Señorías, nos ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo llegar a unas proposiciones aceptadas por todos y satisfactorias para todos. Ha sido mucho el tiempo empleado, mucho el esfuerzo y grande la decisión por parte de mi Grupo y por parte del Gobierno, para que ahora pudiera quedar empañado este esfuerzo y este trabajo. Por tanto, no hemos querido que esto pudiera permanecer como una duda flotando en el ambiente.

Nada más. Esta es la explicación que nosotros damos a nuestra decisión de votar favorablemente esta enmienda. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Para explicación de voto, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor Gracia.

El señor GRACIA NAVARRO: Por razones estrictas también de cortesía parlamentaria y por coherencia con un comportamiento normal, entendemos que procede la explicación del voto

del Grupo Parlamentario Socialista en el trámite de proposición de ley sobre la modificación de la ley de distintas modalidades de referéndum.

En primer lugar, el Grupo Socialista quiere hacer constar que nuestra abstención respecto de la enmienda planteada por el Diputado señor Gómez de las Rocas se fundamenta en que consideramos que dicha enmienda no expone el tema de fondo que está bajo la proposición de ley que nos ha ocupado, porque entendemos que esta proposición de ley es el instrumento para la expresión de una voluntad política de desbloquear el proceso autonómico andaluz.

Por ello nos hemos abstenido, pero quede bien claro que sin perjuicio de que dicha enmienda pudiera ser en otro momento instrumento, asimismo, para expresar idénticas voluntades en otros procesos, tales como en el País Valenciano, en Aragón y en Canarias. El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a considerar en su momento y en profundidad las posibilidades de fórmulas válidas en este contexto.

Respecto a la enmienda del Diputado señor Clavero, hemos votado a favor por razones de perfección técnica y de perfección jurídica. Pero, Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que ésta es una buena ocasión para que nos felicitemos todos, porque en este acto hemos dado carta de naturaleza legal al hecho político fundamental que es el desbloqueo del proceso autonómico andaluz. Y esa felicitación no sólo es por el hecho del desbloqueo, sino por la naturaleza del mismo. Porque nosotros, los socialistas, no nos felicitaríamos por un desbloqueo de simulación o de tramoya, sino por un desbloqueo profundo y efectivo, respetuoso con la voluntad firmemente manifestada del pueblo andaluz por alcanzar la plena autonomía por la vía del artículo 151.

Y nos felicitamos también, Señorías, por el espíritu de unidad coherente asimismo con la expresión unánime del pueblo andaluz el 28 de febrero en que se alcance este desbloqueo. Sólo falta expresar nuestro deseo de que este espíritu ojalá sea el mismo que se refleje mañana, precisamente, en la negociación sobre el Plan de Urgencia para Andalucía entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, para que así se pueda abrir una puerta a la esperanza para el pueblo andaluz.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Andalucista, y para explicación de voto, tiene la palabra el señor Arredonda.

El señor ARREDONDA CRECENTE: Señor Presidente, muy brevemente, para explicar cuál ha sido nuestra posición con respecto a las dos enmiendas presentadas por el señor Clavero. A la primera enmienda, nosotros mantuvimos en Comisión la posición de que no la creíamos estrictamente necesaria. La proposición de ley especificaba muy claramente en el preámbulo que nos encontrábamos ante una proposición de ley que nacía en virtud de los resultados del 28 de febrero. Considerábamos que era una ley que estaba hecha especialmente para Andalucía y que creemos que solamente se va a aplicar la proposición de ley en Andalucía, y eso es lo que le daba un carácter para nosotros todavía más importante. Pero no la considerábamos necesaria y de ahí que nosotros en Comisión mantuviéramos la abstención.

No obstante, hoy, y por los mismos criterios que dijimos antes, creemos que puede ser bueno en un momento determinado que se introduzca esta enmienda en la proposición de ley. Con la explicación del señor Clavero, no hemos tenido inconveniente en votar positivamente, para que no quedara ninguna duda de que no queríamos, en ningún momento, crear entorpecimiento o cualquier posible perjuicio.

En cuanto a la enmienda del Diputado Gómez de las Rocas, nosotros hemos mantenido la misma posición que mantuvimos en la Comisión: nos hemos abstenido. Creemos que estaba claro el plazo que se fijaba en la Ley Orgánica de Referéndum, pero no queríamos que nuestro voto figurara en contra de ninguna enmienda de este tipo, y menos la propuesta por el señor Gómez de las Rocas.

Nosotros nos felicitamos de que hoy se haya aprobado esta primera ley orgánica que viene a desbloquear, junto con la segunda, que nos imaginamos aprobará el Congreso, el proceso autonómico andaluz tras unas largas conversaciones. Quizá esto no hubiese pasado si, por ejemplo, la enmienda que nosotros habíamos presentado en diciembre del año pasado, cuando se discutió la Ley Orgánica de Referéndum, se hubiera aprobado; quizá no estaríamos en esta situación. En cualquier caso, no queremos volver la vista atrás. Creemos que hemos hecho un

esfuerzo entre todos y nosotros nos hemos prestado a este esfuerzo, porque consideramos que lo más importante es solucionar el problema con una síntesis de las dos posiciones que se han mantenido en los últimos momentos de la discusión. Por eso, nosotros hemos aprobado ésta y vamos a dar también nuestro voto favorable en la siguiente ley orgánica.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, y para explicación de voto, tiene la palabra el señor Clavero.

El señor CLAVERO AREVALO: Señor Presidente, Señorías, yo quisiera, por cortesía parlamentaria, agradecer a todos los Grupos el que hayan votado mis enmiendas, bien en la Ponencia, bien en la Comisión, como lo hicieron muchos de los que aquí han intervenido y también, por supuesto, a los que, cambiando su criterio en el día de hoy, se han sumado al voto favorable a mi enmienda.

Pero, sobre todo, quiero mostrar mi satisfacción por el hecho de que después del 28 de febrero los que seguimos defendiendo la autonomía que el pueblo andaluz votó el 28 de febrero, a lo largo de nueve meses, que han sido duros, y en los que algunos hemos dejado mucho, por fin se haya podido entre todos, como creo que hay que hacer las cosas, sobre todo en los momentos constituyentes, entre todos, hayamos podido permitir que Andalucía tenga la única autonomía que quiso; es decir, la que votaron dos millones y medio de andaluces el 28 de febrero.

Nada más, y muchas gracias.

— DE LA COMISION CONSTITUCIONAL,
SOBRE LA PROPOSICION DE LEY ORGÁNICA DE SUSTITUCION EN LA PROVINCIA DE ALMERIA DE LA INICIATIVA AUTONOMICA.

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión Constitucional sobre la proposición de Ley Orgánica de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica.

Vamos a someter a votación el dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 282; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de Ley Orgánica de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica.

Vamos a proceder a la votación final y de conjunto exigida por el artículo 81 de la Constitución respecto de las tres Leyes Orgánicas que han sido objeto de tramitación en este Pleno.

VOTACION FINAL Y DE CONJUNTO DE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE DEFENSOR DEL PUEBLO

El señor PRESIDENTE: Proposición de Ley Orgánica de Defensor del Pueblo. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 285; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de Ley Orgánica de Defensor del Pueblo.

VOTACION FINAL Y DE CONJUNTO DE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DEL PARRAFO 4 DEL ARTICULO 8.º DE LA LEY ORGANICA REGULADORA DE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE REFERENDUM

El señor PRESIDENTE: Sometemos también a votación final y de conjunto, conforme al

artículo 81 de la Constitución, la proposición de Ley Orgánica de modificación del párrafo 4 del artículo 8.º de la Ley Orgánica Reguladora de las distintas modalidades del referéndum.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 280; abstenciones, cuatro; nulo, uno.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de Ley Orgánica de modificación del párrafo 4 del artículo 8.º de la Ley Orgánica Reguladora de las distintas modalidades de referéndum.

VOTACION FINAL Y DE CONJUNTO DE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE SUSTITUCION EN LA PROVINCIA DE ALMERIA DE LA INICIATIVA AUTONOMICA

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación, también final y de conjunto, la proposición de Ley Orgánica de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 281; abstenciones, cinco; nulo, uno

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de Ley Orgánica de sustitución en la provincia de Almería de la iniciativa autonómica.

Las tres proposiciones de Leyes Orgánicas aprobadas serán objeto de la subsiguiente tramitación prevista en la Constitución.

Se levanta la sesión.

Eran las nueve y veinte minutos de la noche.

Precio del ejemplar 50 ptas.
Venta de ejemplares:
SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.
Cuesta de San Vicente, 36
Teléfono 247-23-00. Madrid (8)
Depósito legal: M. 12.580 - 1961
Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID